CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL PEREZ

Sesión Plenaria núm. 124

celebrada el martes, 28 de mayo de 1985

ORDEN DEL DIA

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

— De la Comisión de Constitución en relación con el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral General («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 244, de 27 de mayo de 1985).

SUMARIO

<i>Se reanuda la sesión a las diez y cinco de la mañana.</i>	
	Página
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación)	5812
	Página
De la Comisión de Constitución en relación con el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral General	5812
<i>La señora Ruiz-Tagles Morales expone el dictamen de la Comisión. Seguidamente interviene el señor Vicepresiden-</i>	

te del Gobierno (Guerra González). Para turno a favor interviene el señor Izquierdo Collado. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera. En turno de portavoces intervienen los señores Oliveras i Terradas, Renobales Vivanco, Reigada Montoto y Laborda Martín. Seguidamente hace uso de la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno. Interviene a continuación el señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera y, de nuevo, el señor Vicepresidente del Gobierno.

Se aprueba el preámbulo.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Mixto, al Título Preliminar.

Se aprueba el texto del dictamen.

El señor Zavala Alcibar-Jáuregui defiende sus enmiendas al Título I. El señor Bosque Hita defiende las enmiendas a

los apartados 4 y 5 del artículo 7.º Para turno en contra interviene el señor Cabrera Bazán. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Bosque Hita y Estrella Pedrola. Interviene el señor Bosque Hita por el artículo 87. Para dúplica contesta el señor Estrella Pedrola.

Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se rechazan las enmiendas del Grupo Mixto.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Popular.

Se rechaza una enmienda «in voce» al número 5 del artículo 7.º

Se aprueban los artículos del 2 al 153, excepto el artículo 7.º, según el texto del dictamen.

Se aprueba el número 4 del artículo 7.º, según el dictamen de la Comisión.

Se aprueba el resto del artículo 7.º

El señor Zavala Alcibar-Jáuregui defiende la enmienda número 145, y da por defendidas las demás. El señor Izquierdo Collado hace uso de la palabra para turno en contra.

Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se rechazan las enmiendas del Grupo Mixto.

El señor Secretario primero (Rodríguez Pardo) da lectura de una enmienda transaccional al artículo 172.3. En turno de portavoces hace uso de la palabra el señor Arespachaga y Felipe.

Se aprueba la enmienda.

Se aprueba el Título II del texto del dictamen, excepto el artículo 172.

El señor Renobales Vivanco defiende las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Título III. Para turno en contra interviene el señor Izquierdo Collado. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Renobales Vivanco e Izquierdo Collado.

Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Título III.

Se rechazan las enmiendas números 71 y 72, del Grupo Mixto.

Se aprueba el texto del dictamen.

El señor Castro Cordobez defiende la enmienda número 1, al Título IV, del Grupo Mixto. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Izquierdo Collado. Seguidamente intervienen los señores Guimerá Gil e Izquierdo Collado.

Se rechaza la enmienda número 1.

Se rechaza la enmienda número 73.

Se aprueba el texto del dictamen.

Se rechaza la enmienda número 154, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se rechazan las enmiendas números 74, 75, 76 y 77, del Grupo Mixto.

Se aprueba el Título V.

El señor Renobales Vivanco defiende la enmienda número 156 y retira las demás. Para turno en contra interviene el señor Cabrera Bazán.

Se rechaza la enmienda número 156, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se aprueban las disposiciones adicionales primera a cuarta.

Se aprueban las disposiciones transitorias una a quinta, la derogatoria y la final.

Después de unas palabras del señor Presidente, se levanta la sesión.

Era la una y cuarenta de la tarde.

Se reanuda la sesión a las diez y cinco de la mañana.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

— DE LA COMISION DE CONSTITUCION EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión o la persona por él designada para exponer el dictamen.

La señora RUIZ-TAGLES MORALES: Señor Presidente, ha sido designada la Senadora Ruiz-Tagles, es decir, yo misma.

El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra.

La señora RUIZ-TAGLES MORALES: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, me cabe a mí el honor de presentar el dictamen de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Esta Ley, que hay que destacarla por su importancia, tiene entrada en esta Cámara el 26 de abril de este año. Se termina el plazo de enmiendas el día 9 del mes de mayo y se presentan 176 enmiendas al proyecto de ley. Se trabaja en Ponencia, formada por cinco miembros: dos del Grupo Popular y tres del Grupo Socialista. Es mejorado este proyecto en el trabajo de Ponencia, y me cabría destacar tres extremos importantes de esta modificación en este proyecto de ley.

En primer lugar, la Ponencia resalta y considera que la publicidad de las resoluciones y consultas evacuadas por la Junta Electoral es objeto de consenso, y así se recoge en el proyecto de ley.

Igualmente, se modifica y se establecen las garantías con las sanciones correspondientes en todo lo referente a la presión del voto, es decir, todo lo relativo al artículo 146.

Y, por último, habría que destacar una enmienda socialista ampliando las incompatibilidades en todo lo que hace a los ayuntamientos y las diputaciones, es decir, en relación con el artículo 203.

Este informe de la Ponencia pasa a la Comisión. Se trabaja en la Comisión el día 23 de mayo y se dictamina el proyecto en el mismo día. Me gustaría destacar de este trabajo de Comisión dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, este proyecto de ley se acomoda, a su vez, al proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en referencia a los órganos judiciales competentes en materia electoral, y todo ello se hace incluyéndolo en una disposición transitoria.

En segundo lugar, se acepta una enmienda, la número 4, del Grupo Popular, donde se adapta también todo este proyecto de ley a la aplicación de las técnicas penales en los delitos electorales.

En el transcurso de la tramitación de este proyecto de ley se han aceptado una serie de enmiendas de las 176, quedando sólo 136 para el Pleno, por lo que podemos decir que éste ha sido un proyecto bastante consensuado y que ha gozado de la participación de todos los Grupos Parlamentarios.

Muy brevemente voy a hacer una referencia de lo que podríamos llamar votos, aunque no tiene ningún voto particular, y de las enmiendas que han quedado para este Pleno. En el Título preliminar tenemos una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. En el Título I tenemos enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular. En el Título II tenemos igualmente enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular. En el Título III tenemos igualmente enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto. En el Título IV tenemos nada más enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En el Título V tenemos enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto. En las disposiciones adicionales primera y cuarta tenemos únicamente enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Después, a las disposiciones transitorias primera a quinta no se ha presentado ningún voto particular. A la disposición derogatoria tampoco se han presentado votos particulares. Igualmente a la disposición final no se ha presentado ningún voto particular. Por todo ello, este proyecto queda, como habíamos dicho al principio, con sólo 136 enmiendas y sin ningún voto particular para debatir en este Pleno.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ruiz-Tagles. Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Guerra González): Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores, voy a hacer una intervención breve, después de la exposición que del trabajo de Ponencia y Comisión ha realizado doña Ana María Ruiz-Tagles, para presentar el proyecto de ley orgánica del Régimen Electoral General. En ella voy a intentar exponer, muy brevemente, cuáles son los criterios que ha seguido el Gobierno para la elaboración de esta Ley.

Como saben sus señorías, la normativa que ha estado vigente en las anteriores convocatorias electorales ha sido el Decreto-ley de marzo de 1977. Se celebraron aquellas elecciones de 1977 con el Decreto-ley y, posteriormente, la Constitución, en el año 1978, estableció un mandato a las Cámaras, al Congreso y al Senado, para elaborar una Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Pero, además, la Constitución recogió algunos de los principios —yo creo que los principios fundamentales y sustanciales— de aquel Decreto-ley de 1977 y que, por tanto, habrían de ser reproducidos en la Ley para la que la Constitución mandataba a estas Cámaras su elaboración.

El artículo 81 de la Constitución establecía que se hiciera esta Ley Electoral General, pero se introdujo en la Constitución una disposición transitoria octava, que en su número 3 permitía la celebración de elecciones siguiendo el mismo Decreto-ley de marzo de 1977 si la disolución de las Cámaras se efectuaba de manera anticipada y sólo en esa ocasión podría utilizarse, entonces, el Decreto-ley de 1977 para que no hubiese un vacío. Así se celebraron las elecciones de 1979.

En la siguiente Legislatura, después de las elecciones de 1979, mandataba ya, por tanto, la Constitución la elaboración de una nueva Ley Electoral General. No se hizo y se acudió a las elecciones de 1982 sin una nueva legislación, habiendo, por tanto, de someterse de nuevo a las indicaciones del Decreto-ley de marzo de 1977.

Con posterioridad, y a raíz de una impugnación de una ley, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1983, estableció qué se entendía por el concepto que la Constitución establecía de régimen electoral general, afirmando el Tribunal en su sentencia que estaría esa ley compuesta por las normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado, y especificaba que para las elecciones que tuviesen lugar en el conjunto del Estado y para aquellas que tuviesen lugar en las entidades territoriales en las que se organiza el Estado, según la Constitución de 1978.

El Gobierno, por tanto, partía de una situación ya bastante clara, no sólo por la legislación anterior a la Constitución, sino también por la sentencia del Tribunal. El Tribunal Constitucional había determinado lo que era el contenido nuclear necesario para cumplir con el imperativo constitucional. El propio Tribunal afirmaba en su sentencia que para que una ley merezca el calificativo de electoral es necesario que contenga como mínimo el núcleo central de lo atinente al proceso electoral, incluyendo en la propia sentencia lo relativo a quién se puede elegir y bajo qué condiciones, quién puede votar, para

qué espacio y tiempo se elige y bajo qué criterios organizativos, desde el punto de vista del procedimiento y de la división territorial.

Cuando el Gobierno presenta esta ley al Congreso y al Senado está dando cumplimiento al artículo 81 de la Constitución. Se trata de establecer las normas electorales válidas para todas las instituciones representativas del Estado en su conjunto y las entidades territoriales que lo componen.

Este proyecto de ley se enmarca en las condiciones básicas que deben garantizar, como establece nuestro texto máximo, la igualdad en el ejercicio del derecho al sufragio de todo proceso electoral que se celebre en el Estado español, sea éste del carácter que sea.

Por esta razón, el Gobierno pretendió y pretende, en primer lugar, que el proyecto alcance la más amplia legitimidad no sólo jurídica, que, naturalmente, se la da la aceptación por las Cámaras, Congreso y Senado, de la ley, sino también una legitimidad política, intentando el máximo apoyo, el más amplio consenso entre los grupos políticos representados en ambas Cámaras, en el Congreso y en el Senado.

Creo que se puede afirmar que el proyecto recoge en una amplísima generalidad (siempre existen algunas excepciones) las propuestas de los representantes de los Grupos Parlamentarios. Creo que se ha conseguido una aceptación generalizada de los principios fundamentales del proyecto, lógicamente con diferencias en los detalles. Yo diría en lo accesorio, que no en lo fundamental. Esto, a veces, se ha alcanzado por renuncia de posiciones de algunos Grupos Parlamentarios, y específicamente (lo tengo que decir), a veces se ha alcanzado a costa de renuncias a algunas de las posiciones del propio partido que apoya al Gobierno, que ya en su programa electoral llevaba, como es lógico, y así todos tienen la legitimidad de hacerlo, como uno de los objetivos a cubrir, un proyecto de ley con unas determinadas características.

A veces se ha hecho renuncia a principios propios, a planteamientos propios, porque considerábamos más importante, más justificado, hacerlo en aras de un apoyo mayoritario de la ley, de una legitimidad que no pudiera crear una sensación de que las reglas del juego que se establecen mediante una ley electoral pudieran estar viciadas de origen.

El criterio del Gobierno, por tanto, al elaborar esta ley, es que ésta sea aceptada por la inmensa mayoría de los españoles representados en las Cámaras, por la inmensa mayoría, por tanto, de Diputados y Senadores. Así ocurrió en el Congreso de los Diputados, donde SS. SS. saben que obtuvo el 98 por ciento de los votos de la Cámara, con sólo dos votos en contra, situación de una ley orgánica electoral que no admite parangón con ninguna legislación comparada. No existe un caso que permita hablar de tanto apoyo a una ley electoral, que tradicionalmente ha sido considerada una ley que el partido que domina la Cámara quiere utilizar para sus fines partidistas y, desde luego, es la ley orgánica que ha tenido hasta ahora en el Congreso de los Diputados el máximo número de votos en su apoyo desde que se están votando leyes

orgánicas, desde el comienzo de la legislatura de 1977. Esta es una ley que el Gobierno ha elaborado con el objetivo de obtener un máximo respaldo para que su aplicación, tal como establecen la Constitución y la sentencia del Tribunal, sea apoyada mayoritariamente por nuestro pueblo. El Tribunal ya establecía también que debía contemplarse la elección de Diputados y Senadores; naturalmente la ley lo contempla, es el núcleo fundamental, sin perjuicio de lo que se establece respecto de la elección de Senadores en los Estatutos de Autonomía y en la propia Constitución, aquellos Senadores que representan directamente a las Comunidades Autónomas, que queda lógicamente salvado en el texto de la ley. También se establece la aplicación a las elecciones de los miembros de las Corporaciones locales, y hay sentencias muy claras del Tribunal Constitucional que deben disipar toda duda sobre la conveniencia de esta cuestión en este texto de régimen electoral general.

Asimismo, también en términos que yo calificaría de restrictivos, porque así debe ser, en el Título VI de la ley se establecen las normas de aplicación a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que deben tener, como digo, un carácter restrictivo y supletorio de la legislación autonómica en la materia.

Condición básica de este proyecto de ley, como establece nuestra Constitución, es la salvaguarda del voto universal, libre y secreto. Quizá también una característica del proyecto sea su globalidad, pues en él se incluyen todos los aspectos positivos del régimen electoral, constituyendo un auténtico código electoral en el que se ofrece un cuerpo global y uniforme de toda la normativa aplicable a cualquier proceso electoral.

El proyecto de ley está estructurado precisamente para el cumplimiento de esta finalidad de globalidad; en él se plantea una división fundamental; por una parte, disposiciones generales que se refieren a diferentes tipos de procesos electorales, de elecciones políticas que constituyen modulaciones de los principios generales, naturalmente con las peculiaridades propias de cada uno de los procesos electorales que se pueden celebrar. Yo creo que característica digna de ser resaltada en este proyecto de ley es que en él se pretende recoger la experiencia acumulada de los procesos electorales celebrados en España hasta el presente, desde la instauración de la democracia en 1977 hasta las últimas elecciones celebradas en el año 1983.

Debe quedar suficientemente claro que no es un proyecto que signifique un vuelco total, un nuevo sistema global electoral; al contrario, hemos partido de un dato que nos parece políticamente relevante: la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles hemos aprendido a utilizar nuestro derecho de sufragio con el Decreto-ley de 1977. Es cierto que una modificación en profundidad de ese sistema sería difícilmente posible en parte —como ya antes indiqué— porque la Constitución recogió en sus líneas esenciales el contenido del Decreto-ley de 1977. Naturalmente, se pueden modificar algunas cosas, de hecho se hacen algunas modificaciones en este proyecto de ley porque la Constitución lo permite, pero los resultados

de las mismas, desde el punto de vista de los logros políticos, no son sustanciales, sino más bien relativos o accesorios. Además, yo diría que en el plano de lo coyuntural, de lo contingente, se puede decir fuera de toda duda, fuera de toda discusión, que ha sido funcionalmente innegable la aplicación que se ha hecho del Decreto-ley de 1977 para la consolidación del sistema democrático en lo que hace referencia a lo electoral en España. Lo cierto es que el Decreto-ley, con las coincidencias y las discrepancias, ha funcionado hasta el punto de permitir estructurar una Cámara unas veces de un tono político y otras de otro; ha permitido la alternativa de las Cámaras, en el Congreso y en el Senado, e incluso ha permitido mayorías cualificadas. Ha sido un sistema que sin duda ha permitido el sistema democrático de la alternancia, incluso a veces con márgenes importantes. Por tanto, se muestra como un instrumento importante para garantizar el derecho del sufragio.

¿Quiere esto decir que la ley no tiene novedades respecto del Decreto de 1977? No es cierto, el texto tiene importantes y significativas novedades respecto de la normativa todavía vigente en España.

Quizá el aspecto en el que se pueden observar mayores novedades lo fuera el del procedimiento electoral, materia ésta del procedimiento que no estaba bien regulada a nuestro juicio en el Decreto-ley, quizá por la inexperiencia de todos los que elaboraron el Decreto y los que en conversaciones posteriores, sobre todo en el proceso de 1977, estuvieron apoyando distintos desarrollos de aquel Decreto-ley.

La verdad es que a aquel Decreto-ley siguió un número importante de decretos que lo desarrollaban, que iban apareciendo conforme se iban captando las carencias del texto y que a veces llegaban incluso a producir normativas contradictorias entre sí; toda esa masa de decretos que a veces ni siquiera eran coherentes entre sí, esa masa de decretos de desarrollo ha sido regulada ahora en esta Ley, y regulada de manera lineal, coherente, dando una garantía a los electores y a los candidatos que puedan recurrir a las elecciones. De tal manera que, establecida esta reserva de ley que hacemos al introducirlo en el texto, no es posible, mediante decretos de ningún Gobierno, proceder a la modificación a través del desarrollo de las decisiones que las Cámaras, Congreso y Senado adoptan mediante el texto legal.

Además del procedimiento electoral, se han introducido también normativas en lo electoral que están extraídas de decisiones anteriores de estas Cámaras. Se han introducido algunas modificaciones en ella, pero, como digo, lo sustancial viene ya de unas disposiciones que aprobaron las Cámaras, el Congreso y el Senado en esta legislatura. Por ejemplo, se ha introducido todo el procedimiento y la materia electoral de elecciones locales, Ley que ya fue aprobada en 1978 y modificada en 1983, en este caso, como recordarán con sentencia positiva del Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, se ha recogido también la Ley de Incompatibilidades de Diputados y Senadores, que fue aprobada por las Cámaras en esta legislatura y que mereció una sentencia desfavorable del

Tribunal Constitucional, declarando que debía figurar precisamente en la Ley del Régimen Electoral General, en el cuerpo de la Ley que hoy presento ante el Senado. Así lo hemos hecho; eso es precisamente lo que se realiza en el proyecto de ley.

Otra característica del proyecto que en este momento presento a las señoras Senadoras y señores Senadores es que ha sido elaborado desde el obligado respeto constitucional y estatutario a las competencias autonómicas. Se ha pretendido lograr un equilibrio entre la necesidad que tiene el Estado de regular el derecho fundamental del sufragio activo y pasivo en los términos que establece la Constitución en su artículo 81 y, por otra parte, garantizar la igualdad en su ejercicio a todos los españoles, residan donde residan, tal como impone, por otra parte, la Constitución en el artículo 149, lo que se debe ligar con la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las normas de elección de sus propias instituciones de autogobierno.

El procedimiento técnico que se ha seguido para articular ambos principios: la garantía del derecho de todos los ciudadanos y la competencia que tienen las Comunidades a elaborar su propios mecanismos de elecciones ha permitido, yo creo, diseñar un sistema que no sólo da lugar a un desarrollo armónico en este dilema que es necesario conjuntar, sino que incluso permite la modificación o la sustitución en muchos de sus extremos de esta Ley por la actividad legislativa de las Comunidades Autónomas.

Quiero decir que no sólo se permite el desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas de esta legislación, sino que se permite que algunos de los aspectos que esta legislación contempla sean suprimidos o sustituidos mediante la acción legislativa de los Parlamentos Autónomos.

El proyecto de ley pretende ser un instrumento de profundización de la democracia. El sistema electoral de un Estado democrático debe garantizar, como es obvio, como elemento nuclear de este sistema la libre expresión de la soberanía popular; libertad genérica, amplia, que viene rodeada en todo un conjunto de libertades, como la de expresión, información, reunión, asociación, que deben estar garantizadas en el propio proceso electoral. El proyecto pretende reforzar todas estas libertades, impidiendo que los obstáculos que se derivan de la estructura de la sociedad puedan trascender al momento máximo del ejercicio de la libertad política, al momento del proceso electoral.

Para ello se ha introducido una serie de técnicas, que van desde una mejora sustancial de los mecanismos censales hasta un control mucho más riguroso de los ingresos y de los gastos electorales que tengan o que puedan hacer los partidos políticos, las federaciones o coaliciones que se presentan a las elecciones, creando un sistema global que —pienso— redundará en un ejercicio más libre de uno de los derechos esenciales de una democracia representativa. Así, por ejemplo, y debo decirlo también con claridad, una serie de aspectos en los que sí cabe una mayor decisión, un margen, un campo de decisión políti-

ca respecto a lo que se recogía en el Decreto del año 1977 y en la Constitución del año 1978.

En primer lugar, la Constitución permite que el número de Diputados pueda ser fijado entre dos cifras mínima y máxima, entre 300 y 400 Diputados. En el momento actual el Congreso de los Diputados está formado —como saben SS. SS.— por 350 Diputados. Pues bien —como todos ustedes saben—, el Partido Socialista, que apoya al Gobierno y a través de sus Grupos Parlamentarios en el Congreso y Senado, ha insistido repetidamente en la conveniencia de fijar en 400 el número de Diputados, y lo hemos sostenido porque así se alcanzaría un mayor grado en un principio que establece la Constitución: la proporcionalidad. Aunque la verdad es que debemos decir que su alcance no es el que algunos le quieren otorgar. El pasar de 350 a 400 Diputados introduce más proporcionalidad, pero no con el alcance que algunos pretenden hacer creer.

Sin embargo, el proyecto de ley que envió el Gobierno —y actualmente en esta Cámara está en la misma situación— mantiene el número de 350 Diputados. ¿Por qué ha sido así? Ha sido así, en primer lugar, porque así lo ha expresado la mayoría de los grupos políticos consultados representados en las Cámaras, la inmensa mayoría, y éste es uno de los puntos en los que el Partido Socialista ha cedido en sus posiciones iniciales en aras del consenso, en aras de la legitimidad de una ley que tiene que ser una regla de juego político para todos.

La Constitución, por otra parte, establece también una representatividad mínima por cada circunscripción y constitucionaliza, por cierto, la circunscripción como la provincia. Se ha estudiado por el Gobierno —y por las Cámaras sin duda habrá sido motivo de estudio— la posibilidad de reducir el mínimo por provincia a un mínimo de uno, en lugar de dos como está en este momento; hecho que electoralmente, y desde una manera puramente objetiva, favorecería al Partido Socialista dada la concentración de mayor número de electores de este Partido donde hay mayores concentraciones urbanas y sobre todo en zonas industriales. Sin embargo, con esos nuevos mínimos —el de uno por provincia— el sistema sería de dudosa constitucionalidad, porque ya lo es de dudosa proporcionalidad en las provincias escasamente pobladas. Si se rebaja el mínimo a uno por provincia, se convierte en una proporcionalidad casi imposible en términos numéricos, convirtiéndose realmente en un sistema mayoritario, «sui generis» pero mayoritario.

Por lo tanto, atendiendo al criterio de proporcionalidad que establece la Constitución y atendiendo al posicionamiento inmensamente mayoritario de los grupos políticos representados en ambas Cámaras, el Gobierno optó por mantener el mínimo inicial de dos Diputados por provincia. El resto de los Diputados —248— se reparte en proporción a la población atendiendo a un cociente matemático. La aplicación de este cociente matemático va a provocar que algunas provincias pierdan un Diputado respecto de lo que en este momento tienen asignado y que otras, en cambio, lo ganen. Pero quiero señalar que esto no se deriva del texto legal que en este

momento estoy presentando a la Cámara Alta; ni mucho menos, esto estaba claramente establecido ya en el Decreto-ley de 1977 y después recogido en la Constitución, aunque ni en las elecciones del año 1979 ni en las del año 1982 los que debieron hacerlo pusieron al día ese reparto proporcional de los 248 Diputados.

Es decir, que ese cambio, en algunas provincias, de un Diputado, no es una novedad que introduce esta ley. La ley lo único que hace es cumplir el mandato constitucional, respecto a la movilidad poblacional en el territorio español, de renovar lo que corresponde a cada provincia según el número de habitantes en cada momento. Por cierto, que no sólo la Constitución lo establecía, sino también el Decreto-ley de 1977, aunque nunca se aplicó.

Por otra parte hemos mantenido el tope mínimo por provincia para tener derecho a asignación de escaño, tope que estaba establecido en el 3 por ciento. Algunos pueden decir que por qué se mantiene este tope, si nunca ha funcionado, si no hay ningún candidato de ninguna formación política que no haya accedido, correspondiéndole en el reparto un escaño de Diputado, porque no tuvo el 3 por ciento. El mínimo es tan bajo que no funciona. Sin embargo, hemos creído en el Gobierno que era prudente no aumentar ese tope porque ello supondría tal vez eliminar de las Cámaras la posibilidad de la presencia de algunos pequeños grupos, bien sean de ámbito nacional, bien de ámbito de Comunidades Autónomas, pero que representa un sentir político, un pensamiento político en esa Comunidad o en el conjunto del Estado; que se debería continuar permitiendo, facilitando, favoreciendo que tuvieran representación en las Cámaras.

Por último, respecto a la elección de Senadores, se ha optado por el mantenimiento del sistema actual, es decir, el que estaba vigente derivado del Decreto-ley de 1977, porque, aunque ha habido algunos planteamientos diferentes que se separaban de este modelo, lo cierto es que no ha habido un consenso mayoritario que permitiera pensar en esa modificación.

En definitiva, les puedo decir, señoras Senadoras y señores Senadores, que con la presentación de este proyecto de ley el Gobierno quiere expresar una vez más su voluntad de lograr el máximo acuerdo en torno a una ley que, lejos de querer fijar el punto de vista unilateral de un Partido político determinado, ha de ser el instrumento aceptado por todos para la consecución de la alternancia en el poder político, que es la esencia misma del sistema de democracia representativa.

Hoy, en el momento en que me cabe la satisfacción de volver a presentar este proyecto en un proceso ya por cierto muy avanzado de su tramitación, como se ha expuesto en nombre de la Comisión del Senado, como es el Pleno de esta Cámara, me parece que es un momento oportuno para hacer un mínimo balance del trabajo realizado por todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado hasta este instante en el perfeccionamiento del proyecto gubernamental para dar un instrumento adecuado del ejercicio del derecho al sufragio.

En este sentido, me permitirán que exprese mi satisfacción por el clima en el que se han desarrollado las

discusiones parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado. Creo que es motivo de legítimo orgullo para los Grupos Parlamentarios el haber sido capaces de mostrarnos, hasta este instante (y espero que así lo sea en la discusión que resta todavía en esta Cámara en ejercicio de su soberanía) prácticamente unánimes en lo sustancial en torno a un proyecto de ley cuyo objetivo es, precisamente, organizar las condiciones de un juego político en el que todos debemos participar cuando así lo deseemos.

Este objetivo, que dotará, sin duda, de una gran estabilidad a la normativa electoral de estos momentos, y que va a ser abordado definitivamente por esta Cámara, ha sido ampliamente alcanzado hasta aquí, y muy sensiblemente reflejado en las votaciones del Congreso de los Diputados, como antes relataba, lo que, a mi juicio, es, sin duda, una de las primeras grandes virtudes de esta ley: el apoyo muy mayoritario de las Cámaras.

La ley ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los congresistas. Así espero que lo sea por parte de los Senadores, y aunque tuvo sólo dos votos en contra (yo esperaba que así sucediera igualmente en el Senado) no es el momento, lógicamente, de detenernos, porque será objeto de las discusiones, en un análisis detallado de lo que va a ser el contenido de la discusión parlamentaria.

Pero es claro que reformas como las efectuadas a los mecanismos censales, a la financiación y control de los fondos públicos que subvencionan las actividades electorales en cuanto a la instauración de un nuevo procedimiento de recursos electorales, junto a otras muchas modificaciones, suponen un importante catálogo de mejoras políticas que significan un gran paso adelante, en mi criterio, en la definitiva consolidación y funcionalidad de las instituciones representativas.

Quiero terminar señalando el importante papel, como ya ha sido referido por la Senadora Ana María Ruiz-Tagles, que en el proceso de elaboración de esta ley ha correspondido cumplir al Senado. En efecto, son importantes y numerosas las mejoras que esta Cámara ha querido, y ha sabido, introducir. Con ello se ha demostrado no sólo que en esta sede ha existido una especial sensibilidad y atención a esta norma fundamental, sino también el profundo sentido que para nosotros adquiere el bicameralismo en España, que se ha manifestado en otros muchos proyectos discutidos y aprobados a lo largo de esta legislatura. Sólo me queda felicitar a los Grupos Parlamentarios por la labor que han realizado y esperar —con una esperanza legítima— que también en esta Cámara se llegue a un amplio acuerdo en torno a una ley que constituye un símbolo indudable de que se ha producido ya en nuestro país la definitiva consolidación del sistema democrático.

Muchas gracias. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Entramos en el debate de totalidad. Para turno a favor del proyecto de ley tiene la palabra el señor Izquierdo Collado. *(El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.)*

El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Vicepresidente, señorías, muy brevemente porque en una ley de la importancia de la ley electoral no puede faltar el turno a favor del Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno.

Afortunadamente hemos contado con la intervención del Vicepresidente del Gobierno, intervención que quiero que se contemple como del Grupo Socialista, lo que nos evita entrar en repeticiones que difícilmente podrían añadir nada a lo ya dicho; intervención también destinada a agradecer la colaboración y el trabajo de todos los Grupos de la Cámara, un trabajo constructivo, positivo y que estimamos que puede tener un efecto importante incluso en materias que tienen especial sensibilidad para esta Cámara, por ser de un carácter netamente específico en cuanto a la elección de Senadores. Quiero informar a la Cámara que el fruto de ese trabajo, que el fruto de la colaboración de los distintos Grupos Parlamentarios puede permitir —y en esa dirección se está trabajando— que la papeleta del Senado sufra modificaciones con respecto al proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados y remitido sin modificación por el Congreso al Senado.

El texto del Congreso llegó al Senado, como digo, en términos idénticos al proyecto de ley y, en función de una serie de votos particulares de los distintos Grupos de la Cámara, se ha producido un acercamiento que puede culminar en una disposición de la papeleta del Senado que estimamos racionaliza y perfecciona técnicamente dicha papeleta.

Por reseñar algunos elementos que ya comentaremos en su momento en el debate, las papeletas del Senado estarían impresas por una sola cara y el orden de aparición en ellas de las distintas candidaturas sería el de candidatos agrupados por cada uno de los partidos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores que les han presentado, con lo que se evitaría esa dispersión que se produce actualmente en la papeleta del Senado, en la que candidatos presentados por un mismo partido o coalición aparecen diseminados. Los candidatos de un mismo partido, coalición, federación o agrupación independiente de electores irán, por tanto, agrupados en esa papeleta y el orden interno de esa lista de cada partido, agrupación o federación corresponderá a la ordenación alfabética, de la «a» a la «z», en cada una de ellas.

Consideramos que esta innovación supone un paso importantísimo en la estructuración de una papeleta del Senado que sea mucho más transparente para los electores, que transmita más información, que facilite su voto y que, por tanto, incluso elimine la posibilidad de una serie de votos nulos, lo que ha sido frecuente en anteriores convocatorias.

Estimamos que este trabajo es una colaboración importante. Esta Cámara ha contribuido a otra serie de mejoras técnicas, y el resultado de ello es una ley de la que la Cámara, prácticamente en su totalidad, se siente satisfecha.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Gracias, Senador Izquierdo.

¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Vicepresidente, subo a esta tribuna no para decir que toda la ley en su conjunto es un desastre (Risas.) —no todo lo que hace el señor Guerra es un desastre; sólo algunas cosas (Risas.), para que no haya un coro totalmente favorable y por algunas cuestiones de fondo que me parecen fundamentales.

Los comunistas pensamos, y no tanto —yo les ruego que me crean— porque seamos hoy un partido pequeño y con escasa representación, que en esta ley hay algunas cuestiones de fondo en las que el Gobierno y el Partido Socialista se han equivocado.

De esta ley no se puede decir solamente que es consensuada por todos los grupos, en primer lugar, porque no es cierto —no lo es por todos los grupos— y, en segundo lugar, porque esta ley es realmente la ley del bipartidismo, la ley del esquema bipartidista en España. Es claro que hay un consenso entre el Partido Socialista y Coalición Popular —es algo conocido—, consenso en algunos aspectos fundamentales. Luego, por la cuestión de las ramas y para parecer distintos (Risas.), hay que jugar a la oposición, pero lo cierto es que el Partido Socialista y el Gobierno del PSOE han conseguido convertir en un satélite político a estos señores (Señalando los bancos de la derecha. Risas.) Esto es algo palpable. En el fondo hay un acuerdo básico en los grandes temas de la política. ¿La filosofía de nuestra política exterior? Estamos de acuerdo: atlantismo a tope. ¿La filosofía de la política económica? Estamos de acuerdo en que los empresarios ganen más dinero para que así inviertan, etcétera. Quienes no estamos de acuerdo somos los que seguimos representando a los trabajadores, no sólo de nombre, sino de hecho. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

Decía que me iba a referir a dos o tres grandes cuestiones que en esta ley entendemos nosotros que no resuelven problemas. En primer lugar, la cuestión de la no igualdad de oportunidades de las fuerzas políticas ante un proceso electoral. Pensamos que los criterios que se contienen en cuanto al reparto de espacios en medios de comunicación de titularidad pública y otros aspectos optan por el criterio de los resultados de las elecciones anteriores y no por el de dar una igualdad de oportunidad real a las fuerzas que se presentan a esa nueva convocatoria. Nos parece que ese es un criterio erróneo y que lo correcto hubiera sido esa igualdad de oportunidades, porque sin ella de alguna forma se está condicionando el hecho de que las mayorías puedan convertirse en minorías y, viceversa, las minorías en mayorías, que es el principio fundamental de la democracia en su aspecto formal, facilitar y hacer posible la alternancia en el poder. Pues bien, creemos que no se respeta la igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas.

Pero hay otro elemento que nos parece incluso más importante, que es lo que la Constitución establece en su artículo 68.3, el tema de la proporcionalidad. No se puede seriamente decir que ésta es una ley suficientemente proporcional. Según los resultados de las últimas elecciones —voy a poner el ejemplo comparativo del Partido Socialista y del Partido Comunista—, SS. SS. saben que el Partido Socialista obtuvo aproximadamente diez veces más votos que el Partido Comunista y, sin embargo, la representación en el Congreso de los Diputados no fue 10 sino 50 veces mayor, y eso no es proporcional. Ustedes se pondrán como quieran, pero eso no es proporcional, no respeta estrictamente el espíritu del artículo 68.3 de la Constitución.

Es cierto que conseguir una proporcionalidad perfecta es imposible, pero también es cierto que se podía haber avanzado mucho más. Nosotros en nuestras enmiendas —que después de esta intervención voy a dar por defendidas prácticamente, salvo alguna que necesite una explicación especial— planteamos el tema del número mínimo de Diputados por provincia. Nos parece que es cierto lo que señala el señor Vicepresidente de que en el ámbito provincial puede funcionar la reducción a uno como un sistema mayoritario, pero ciertamente lo que se ganaría en el conjunto en cuanto a proporcionalidad sería bastante más que lo que se perdería en ese ámbito provincial; ésa es nuestra opinión.

También hemos planteado el tema de los 400 Diputados. Es curioso que el señor Vicepresidente del Gobierno haya dicho que el Partido Socialista ha cedido. ¡Qué casualidad! Justamente ha cedido en los temas que eran progresistas de la ley para hacerla menos progresista, desde nuestro punto de vista. El tema de los 400 Diputados también lo planteamos nosotros porque ayuda a la proporcionalidad. Respecto al tema de la regla matemática y la ley D'Hont, a nosotros nos parece que hay otras reglas matemáticas que son mucho más respetuosas con el espíritu de la Constitución y que no darían esos resultados tan absolutamente dispares, de tal manera que a un partido pequeño le cueste obtener un escaño de 90.000 a 100.000 votos y a un partido grande de 25.000 a 30.000. Eso no se casa con el espíritu de la Constitución. Hay que recordar de nuevo que el tema de la proporcionalidad tiene bastante que ver con el de la democracia porque, como decía antes, democracia en su aspecto formal es que los partidos que hoy son minorías puedan mañana ser mayorías y viceversa. Cuando me refiero a partidos grandes y a partidos pequeños estoy hablando, por ejemplo, de partidos pequeños, como el mío que aspira a ser grande y de partidos grandes que nosotros pensamos que deben seguir siendo grandes, y otros no tanto.

La ley electoral en su conjunto nos parece que se ha quedado pacata, se ha quedado corta, se ha quedado bipartidista y, en definitiva, nos parece bastante insuficiente. No es esta una ley electoral que profundice en la democracia en el sentido de que la haga más representativa. No nos olvidemos, señorías, que uno de los problemas principales de las democracias parlamentarias es que

hay un progresivo distanciamiento del nivel representativo de las Cámaras en relación con la problemática real; un distanciamiento en el tiempo, en el lenguaje, y también en la proporcionalidad que de unas elecciones resulta en cuanto a número de representantes, etcétera.

Decía el señor Vicepresidente del Gobierno que en el Congreso de los Diputados sólo había habido dos votos en contra. Si la ley electoral hubiera sido proporcional, seguramente hubiera habido treinta o cuarenta.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, estamos iniciando el debate sobre el proyecto de ley orgánica del régimen electoral general, ley que desarrollará el mandato constitucional sobre la materia y cuya aprobación pondrá fin a la peculiar circunstancia que ha acompañado tanto las elecciones generales de 1979 y 1982 como las locales de 1979 y 1983, a saber —y nos lo recordaba el señor Vicepresidente del Gobierno—, que se celebrasen con arreglo a una normativa preconstitucional, el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, y la Ley 13/1978, de 17 de julio, respectivamente. Y me corresponde a mí fijar la posición del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado sobre tan importante proyecto de ley.

En anteriores intervenciones relativas a otros proyectos de ley, ya hemos puesto de manifiesto cuál es la filosofía de nuestro Grupo Parlamentario respecto a temas que, como el presente, se refieren a cuestiones de Estado o de desarrollo constitucional: la voluntad de acuerdo. Creo, sinceramente, que nuestro Grupo Parlamentario se ha caracterizado —por lo menos así lo pensamos nosotros y repito que con toda sinceridad— tanto por su participación activa en las tareas legislativas de esta Cámara como por su afán por llegar a acuerdos que faciliten votaciones lo más consensuadas posible.

En el proyecto de ley que nos ocupa, desde el comienzo de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, nuestro Grupo homólogo en aquella Cámara, el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, ha contribuido a tender puentes de unión, puentes de acuerdo, convencido de la necesidad de que este país cuente con una buena ley electoral, una ley que asegure al ciudadano unas elecciones limpias, con todas las garantías jurídicas para que emita su voto en libertad, una ley electoral duradera en el tiempo.

Los procesos electorales son un elemento básico en todo régimen democrático y nuestro deseo es que la ley que los regule pudiera lograrse con un amplio consenso. Creemos que dicho consenso se ha alcanzado virtualmente en la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios y que, con la excepción de determinadas enmiendas que muestran discrepancias de fondo muy legítimas, no son óbice al mismo las diferencias de matiz que serán objeto del debate de hoy. Creemos que esto es bueno y positivo

en una ley que viene a enmarcar lo que debe ser el juego electoral en el concurso democrático. Es importante que tan trascendental normativa salga apoyada por la amplísima mayoría de esta Cámara.

Los regímenes democráticos están enmarcados por tres coordenadas que se proyectan, todas ellas, en el proceso electoral: el principio de la igualdad política, el principio de la soberanía nacional y el pluralismo.

El principio de igualdad política, como base de la participación en el poder, se expresa a través del voto igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, siendo el supuesto de esta igualdad política el sufragio universal, sin distinción de sexos, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de cualquier otro género, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

La segunda coordenada es que la ley debe ser expresión de la voluntad general en la que participan todos los ciudadanos, personalmente o por representantes.

Y la tercera coordenada es el principio pluralista entendido como libertad de concurrencia y que implica asimismo elecciones libres, en el curso de las cuales todas las tendencias de opinión puedan afrontar el sufragio de los electores. Es admitir, al propio tiempo, la pluralidad de partidos.

Partiendo de estos tres grandes principios, se puede afirmar que un régimen es democrático cuando en un país hay elecciones periódicas en las que los ciudadanos, como electores, pueden escoger libremente entre varias opciones que representan corrientes diversificadas de creencias y opiniones. En esete sentido estimamos acertada, y la compartimos, la afirmación formulada en Comisión por el Senador Izquierdo de que una ley electoral viene a ser como la segunda Constitución de un país, lo cual constituye, a nuestro entender, un argumento definitivo en favor del consenso que propugnamos y que estoy convencido de que toda la Cámara desea.

Minoría Catalana participó activa y responsablemente en la cuota de consenso que se alcanzó en la Cámara Baja. Pensamos haber contribuido a objetivar y judicializar aspectos tan importantes como el proceso electoral y el control electoral. Pensamos haber contribuido a afirmar y proteger los principios de universalidad, libertad y secreto, que son condición de la recta expresión de la voluntad política individual; a afirmar y proteger el principio de la igualdad entre contendientes que se disputan el favor de la opinión pública. Y también pensamos haber contribuido a afirmar y proteger el principio de la neutralidad que es exigible a los poderes públicos en toda competición electoral. En esta línea seguimos y pensamos seguir. Por esta razón nos hemos abstenido de formular enmiendas, ni tan siquiera de matiz, pensando además, que con esta actitud enfatizamos nuestra voluntad de consenso.

Esta es, señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Oliveras. Tiene la palabra el señor Renobales.

El señor RENOBLES VIVANCO: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señoras y señores Senadores, mi intervención va a ser en realidad breve, porque en definitiva estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho desde esta tribuna. En términos generales, estamos también muy de acuerdo con el contenido de la ley, aun cuando hemos presentado bastantes enmiendas en nuestro deseo de manifestar este afán de colaboración y de perfeccionamiento que nuestro Grupo expresó ya en el Congreso de los Diputados y que también está dispuesto a manifestar en esta Cámara.

Sin embargo, y como es obvio, dadas las singularidades y especificidades que se recogen en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, nosotros tenemos que hacer alguna puntualización, y la hacemos aun sabiendo que en el texto establecido en la ley se ha tratado de salvaguardar aquellas potestades de las Comunidades Autónomas; criterio que indudablemente agradecemos, pero que creemos que puede ser mejorado y perfeccionado porque, como vuestras señorías conocen perfectamente, todo el secreto para la vinculación, para la coordinación, para el ensamblamiento precisamente en las Comunidades Autónomas, y en especial en aquellas que puedan tener potestades en esta materia de orden electoral, está en la determinación de cuáles puedan ser aquellas condiciones básicas. Este es un concepto fundamental, un concepto muy importante y que nunca debería sacarse ni distorsionarse fuera de lo que es el artículo 23 de la Constitución, donde en definitiva tiene la apoyatura esencial, la apoyatura básica, ese derecho fundamental de todos los ciudadanos españoles para participar en las tareas de Gobierno a través de una ley electoral.

Saben SS. SS. que en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, por su estructura singular —una estructura que podríamos llamar federal o cuasi federal—, existen unas potestades o facultades exclusivas que están recogidas a lo largo del Estatuto, no solamente en el artículo 10.3, sino, fundamentalmente, en el artículo 37; facultades exclusivas que determinan unas excepcionalidades que incluso han sido recogidas expresamente por el Tribunal Constitucional, el cual las ha calificado de regímenes electorales de excepción y que, por tanto, entendemos que deben quedar perfectamente salvaguardadas cuando se trata de establecer una ley electoral. Porque esta ley electoral, aun siendo una ley orgánica, no puede llegar a modificar aquellas potestades estatutarias que fueron reconocidas ya, por cuanto forman parte de un bloque de constitucionalidad; son esas leyes que podemos decir paraconstitucionales y que tienen una gran importancia y una gran trascendencia para todos los ciudadanos, no solamente del País Vasco, sino de todo el Estado español, sobre todo, además, cuando las elecciones se refieren única y exclusivamente a las instituciones propias y particulares del País Vasco. Entonces, incluso vinculando el artículo 139 con el artículo 149.1.1.ª, el principio de igualdad, esas condiciones básicas para que

sean iguales en el ejercicio de los derechos y deberes todos los ciudadanos creo que tienen una singular matización territorial que se respeta perfectamente, como lo ha demostrado la ley electoral del Parlamento vasco, sobre la que el Gobierno de la nación lo único que ha creído que debería matizar o reprochar era algún aspecto en relación con el censo electoral. Esto es lo que hubiera querido ver reflejado más claramente y de una manera más específica porque, posiblemente, no existe otra Comunidad Autónoma en la que el régimen electoral municipal, por ejemplo, está reservado a las instituciones de los territorios históricos y no está reservado ni siquiera al Parlamento vasco, sino que en el artículo 37 —y en él se establecen además los principios básicos para que se respete ese principio de igualdad— está recogido de una manera clara, respetándose todos los principios de sufragio universal: que sea libre, que sea directo, que sea secreto y de representación proporcional, con circunscripciones electorales que procuren una representación adecuada de todas las zonas de cada territorio.

Es indudable —como dice el Tribunal Constitucional— que es difícil determinar lo que es básico y lo que no tiene realmente este carácter. Y si todavía complicamos el tema tratando de unir a lo básico lo que tratan de llamar materias conexas, indiscutiblemente la dificultad todavía será mayor. Pero el hecho de que exista la dificultad no excluye que nosotros debamos hacer el esfuerzo de destacar la singularidad, porque, vuelvo a repetir, esa singularidad es muy importante. Nuestro pueblo es muy celoso de estas prerrogativas o de estas potestades. Yo sentiría extraordinariamente que, por discrepancias de matiz, nuestro pueblo tuviera que acudir a preguntar al Tribunal Constitucional si, efectivamente, aquí nos excedemos o no para evitar todos estos temas o conflictos que, en definitiva, no son todo lo constructivos que ambas partes quisiéramos que fueran. Estas son las únicas matizaciones que quiero hacer respecto al proyecto. He tratado de salvaguardar estos aspectos en alguna de las enmiendas que hemos presentado; otras no tienen nada que una finalidad meramente técnica de tratar de perfeccionar, de aportar un criterio que podrá ser aceptado o no, pero que ha sido aportado con el mejor deseo y buena fe para poner de manifiesto nuestro propósito indestructible —por decirlo de alguna manera— de contribuir a la creación de esa democracia por la cual todos, en una u otra medida, hemos luchado y batallado suficientemente para que nadie pueda dudar de la rectitud de nuestras intenciones.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Renobales. El señor Reigada tiene la palabra.

El señor REIGADA MONTOTO: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, la elección es, sin duda, la base del sistema del modelo democrático; es el procedimiento de designación de gobernantes opuesto a la herencia, a la cooptación, a la conquista violenta del poder, que son los medios que se califican de autocráti-

cos. Pero con relación a esto, como señala muy acertadamente Duverger, para éstos es necesario también camuflarse tras un procedimiento electoral por unas pseudo-elecciones o un pseudo-parlamento para plagiar una legitimidad de origen. Podemos decir que la ceremonia electoral es, para la investidura de los gobernantes modernos, tan imprescindible como era la consagración, en la catedral de Reims, para la monarquía francesa.

Abordamos hoy, señorías, la ley electoral en esta Cámara Alta; un auténtico —como ha dicho el señor Vicepresidente del Gobierno— código electoral que se integra en lo que ha dado en llamarse bloque constitucional, que está dominado por el espíritu consensual y de concordia que presidió la redacción de nuestra Constitución. Pero en todos estos consensos entre partidos de izquierda y de derecha ocurre que se genera un tipo de tensión parecida a la de los matrimonios: uno tira hacia el este, otro hacia el oeste y el resultado es que se dirigen hacia el norte, que era a donde ninguno de los dos quería ir. Este forcejeo consensual produce, por tanto, dentro del Grupo Parlamentario Popular el siguiente resultado. Primero, la aceptación de buen grado de todas aquellas disposiciones de la ley que tienden a reforzar el sufragio universal libre, directo, igual y secreto, que ya sancionó por duplicado la Constitución en los artículos 68 y 69.

Un sufragio, primero, universal, que viene a condenar aquel sufragio censitario que restringía el voto por condiciones de fortuna y que rigió en España en la I República, del que dice Larra con gracejo que una talega difícilmente se equivoca, dos talegas siempre aciertan y muchas talegas hacen maravillas.

También condena el sufragio llamado capacitario, un sufragio que restringe el voto por razón de condiciones de raza, sexo o instrucción. El tan debatido voto femenino, que tardíamente se admitió en algunas legislaciones sorprendentemente, como la suiza, ya no se menciona en esta ley por darse por supuesto.

El artículo 1.º de la ley concede, en definitiva, el derecho de sufragio activo a todos los españoles mayores de edad, exceptuando en el apartado segundo a los que estuvieran privados de ese derecho por sentencia firme judicial y a los incapacitados psíquicamente. Sorprendentemente esta disposición no se exige para el derecho de sufragio pasivo, o sea, para ser elegido.

Sufragio igual, con lo que se condena al voto plural, y dentro del plural al múltiple, el que permitía a una persona votar en varias circunscripciones. Dejando aparte esos pintorescos camiones electorales que en países tercermundistas conducen de circunscripción en circunscripción a los votantes, curiosamente hasta el año 1951 en Inglaterra, por efecto del voto corporativo, una persona podía votar hasta tres veces: en el colegio de su domicilio, en la sede de su comercio y en el colegio de la Universidad donde se había licenciado. El artículo 4.º de la ley dispone que nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones.

Sufragio directo, con lo que se elimina el sistema de compromisarios, que es el que rige para la elección de Presidente en los Estados Unidos de América. Y, por últi-

mo, sufragio libre y secreto, que condena esas manipulaciones materiales, destinadas a convertir en transparente el voto o a alterarlo, o a las presiones o amenazas sobre los electores.

Dice Oscar Alzaga que así como en la Gran Bretaña podemos hablar, con relación al sistema mayoritario, de la ley del cubo, en España —él se refiere al sistema mayoritario de la Ley de Maura de 1907— podemos hablar más bien de la ley del puchero, por cuanto que la historia de nuestro país es la historia del fraude electoral. Y se cita como ejemplo aquellas tristemente famosas elecciones generales de 1884, que fueron dirigidas por el que alguno tacha de gran elector, Ministro del Interior entonces, don Francisco Romero Robledo, y donde la coacción y el abuso de poder fue tal que Sagasta aseguró que las Cortes de España estaban deshonoradas antes que nacidas.

También debemos decir que hoy, con el avance de la tecnología, se ve afectado el sistema democrático, porque es innegable la presión que sobre los electores ejercen los medios de comunicación social, especialmente la televisión, e incluso los instrumentos de la propaganda electoral en general. Nadie discute hoy que la magia negra de los eslóganes hechizó al pueblo alemán en aquellas históricas y desdichadas elecciones de 1932.

El artículo 5.º de la ley dispone que nadie puede ser coaccionado ni obligado en el ejercicio de su derecho de sufragio y tampoco a revelar su voto. Y el artículo 86.1 remacha que el voto es secreto. En los artículos 43 y siguientes se reglamenta el procedimiento electoral (papeletas, votación en sí misma, escrutinio, utilización de los medios de comunicación social, etcétera) y el llamado contencioso electoral, en el que, al aceptar la competencia de las Audiencias Territoriales, la ley rechaza el contencioso político y acepta el contencioso jurisdiccional.

También ese consenso produce en el Grupo Parlamentario Popular la aceptación de buen grado de las disposiciones de la ley, tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado, que viene a ratificar el sistema electoral que fue aceptado por la Constitución en sus artículos 68 y 69 y por el Real Decreto de 1977. Para el Congreso de los Diputados, en el artículo 161 y siguientes de la ley, allí donde la ley pasa de letra a guarismo, acepta un sistema de representación proporcional basado en la muy famosa fórmula del profesor de la Universidad de Gante, Víctor D'Hont, un profesor de Derecho civil muy aficionado a las matemáticas. Es un sistema de representación proporcional pero intensamente matizado por estos mecanismos.

Primero, la fijación de 350 Diputados produce inicialmente un nivel de proporcionalidad semejante al de Italia y la República Federal Alemana.

Segundo, cada provincia constituirá una circunscripción electoral con una representación inicial mínima de dos Diputados. Aquí ya se produce una sobrerrepresentación de las provincias despobladas y una subrepresentación de las provincias de mayor peso demográfico, indudablemente. Pero al mismo tiempo, esto supone una prima para las provincias pobres que pueden llegar a paliar

sus desigualdades económicas; potencia a la España subdesarrollada.

Y por último, tercero, una eliminación de restos por la aplicación del sistema D'Hont, acompañado de una exclusión de aquellos partidos que no hayan obtenido el 3 por ciento de los sufragios emitidos en la circunscripción. Esta es otra fórmula que va dirigida a potenciar los partidos más grandes, a potenciar el bipartidismo. En cuando a la exclusión, como también ha dicho el señor Vicepresidente, es más aparente que real su eficacia, porque sólo tiene verdadero efecto en circunscripciones muy amplias como Madrid y Barcelona.

En cuanto al Senado, los artículos 167 y siguientes de la ley consagran y consolidan esta Cámara Alta como una Cámara de reflexión, de enfriamiento, que busca un «tempo» pausado para la aprobación definitiva de la ley. Una Cámara «sui generis» porque no se inspira en ninguna cercana. Una Cámara que establece un criterio de representación territorial puro con variantes, representación provincial, insular, local (en Ceuta y Melilla) y de Comunidades Autónomas; un sistema que oscila desde el mayoritario puro, en aquellas islas donde existe un colegio uninominal, sistema mayoritario con voto restringido en garantía de minorías, que es el provincial, votando sólo a tres Senadores, y un sistema de representación proporcional limitado en cuanto a las Comunidades Autónomas.

También el consenso produce en el Grupo Popular la no aceptación de buen grado de una limitación que existe para los militares profesionales en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio activo, ya que el artículo 7.º, en su apartado 4, no establece la reserva de puesto, plaza o destino en el caso de ser elegidos. Parece un residuo de una primitiva limitación que hubo para la votación de los militares profesionales que se recogió en algunos países como la III República francesa, quizá como consecuencia de los abusos del Consulado y del II Imperio.

La aceptación, pero no de buen grado, de cierta malquerencia que se observa en materia de incompatibilidades en el artículo 157 a determinados cargos. Y voy a citar expresamente la cátedra, donde, como ya he repetido en esta misma tribuna al discutir la ley y en frase de Gaston Defèrre, no cabe duda que el principio de la libertad de cátedra se impone al principio de la subordinación del poder jerárquico del funcionariado. Bien es cierto que la ley establece una excepción para los profesores universitarios en actividades docentes extraordinarias.

Y, para terminar, señorías, recuerdo que un escritor de mi tierra, Alvaro Cunqueiro, nos cuenta cómo en un pueblo cercano a Mondoñedo convivía con los vivos, envuelto en una capa blanca, un ex litigante famoso de nombre Ferrallo, un difunto que era tan vivo, sin embargo, que llegó a votar en las elecciones generales del año 1936. Y es que desgraciadamente, señorías, en la historia electoral patria, por ese profundo sentimiento religioso del pueblo español, el derecho del sufragio activo fue ejercido frecuentemente por los difuntos, hasta puedo asegurar que a veces votaron más los muertos que los vivos y que

a algunas ánimas se debe la elección de algún concejal. (Risas.)

Finalizo, señorías, diciendo que el Grupo Popular va a votar, desde luego, en favor de esta ley, con excepción de una enmienda anteriormente dicha, la relativa a los militares. Va a votar favorablemente esta ley, haciendo votos para que se convierta en el instrumento que consolide este modelo democrático que, a fin de cuentas, es el elegido libremente por el pueblo español.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reigada.

Tiene la palabra el señor Laborda.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, intervengo en el turno de portavoces muy sucintamente para señalar, en primer lugar, que el clima y las relaciones políticas que se han establecido en torno a este proyecto de ley resultan significativas y representativas del grado de salud democrática que estas Cámaras tienen. Creo que el retraso considerable durante la pasada legislatura ha quedado subsanado en ésta por la presentación de este «corpus» general con el cual se van a regular las elecciones en todos los niveles.

En segundo lugar, por el grado importante de consenso que significa la salud democrática que también tiene el pueblo español y del cual nosotros somos un exponente, porque, en efecto, todos los Grupos Parlamentarios han coincidido en que se ha hecho expresa renuncia a cualquier consideración o interés de Partido o de Grupo Parlamentario en pro de que exista un consenso en torno a esta norma, que asegure, además, no solamente el apoyo y, por tanto, la expresión de consenso en torno a la limpieza y profundidad democrática que la norma encierra, sino la voluntad expresa de que esta norma sea perdurable y que, por consiguiente, cree algo tan importante en una democracia cuales son los hábitos políticos y civiles en torno al momento fundamental, como ha señalado el Vicepresidente del Gobierno, que es el de depositar en la urna el voto para elegir a los gobernantes y a los legisladores.

En consecuencia, creo que este grado de consenso es algo que debemos celebrar como expresión, repito, de esa salud democrática. De hecho, en esta Cámara ha habido un procedimiento creo que excepcional y representativo de este clima, en la medida en que las enmiendas fueron discutidas no sólo entre los Grupos del Senado, sino también en comunicación recíproca con nuestros respectivos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. Todos los Grupos de esta Cámara, incluido el Mixto, han mantenido conversaciones, se han discutido hasta el detalle todas las enmiendas y yo creo poder afirmar que con un grado muy importante de aproximación, con excepción de la intervención del representante del Grupo Mixto, que creo poder limitar como una intervención derivada de su militancia política.

Me parece que la expresión afortunada del señor Oliveras, portavoz de Cataluña al Senado, en el sentido de no

presentar enmiendas, pero participar en la Ponencia a lo largo de toda la discusión del proyecto, ha sido, efectivamente, expresión de esa enfatización del consenso en torno a una norma que es muy significativa.

Yo quisiera tan sólo señalar que este procedimiento que se ha logrado en el Congreso y en el Senado debería ser también el procedimiento a través del cual los Parlamentos autónomos hagan sus respectivas normas electorales, porque, en caso contrario, nos encontraríamos con una distorsión entre ese grado de consenso, de renuncia a posiciones de Partido y de Grupo, ya que, a veces, comprobamos que en los Parlamentos autónomos prevalece la posición de la mayoría sobre la perdurabilidad de la norma y el grado de consenso alcanzado en ella misma, y algún ejemplo tenemos.

Por tanto, yo creo que aquí se ha producido un importante consenso, una integración en torno al proyecto del Gobierno que, indudablemente, no supone satelización de ningún Grupo Parlamentario, aun cuando se ha hecho esa manifestación con un cierto grado de humorismo en esta tribuna. Creo que hacer esa manifestación, no comprender lo que ha habido detrás de esto, proponer enmiendas que no significan sino posiciones exclusivamente de Partido, y de Partido muy minoritario, supone, sin ninguna duda, salirse de órbita en cuanto a lo que es el trabajo parlamentario, en cuanto a este momento que considero que, sin necesidad de subrayarlo con adjetivos históricos, sí que es un momento importante, porque esta norma electoral, señorías, es la norma electoral que la democracia española va a utilizar durante muchos años, es decir, va a ser el esquema fundamental para que se cristalicen y consoliden los hábitos electorales.

No quiero entrar en réplicas con ningún Grupo para no crear incluso una discusión anticipada del articulado, pero creo que es importante hacer esta intervención para subrayar que la Cámara va a aprobar esta ley con alguna modificación relevante, como puede ser, entre otras, el sistema de elección para el Senado, en el que se ha conseguido, como no podía ser menos debido al consenso entre los cinco Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara, una excelente norma electoral.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Vicepresidente tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Guerra González): Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, subo a la tribuna para agradecer la contribución que en la elaboración de la ley han tenido los señores intervinientes, desde don Juan de Dios Izquierdo, pasando por el señor Fernández-Piñar, señores Oliveras, Renobales, Reigada Montoto, hasta el mismo señor Laborda, del Grupo Socialista. Pero, además de agradecer ese esfuerzo por alcanzar un texto que mejore, que sea un ejemplo para los ciudadanos que observen la consolidación del sistema democrático y sus procedimientos para ello como es esta ley, quisiera hacer algunas manifes-

taciones sobre las expresiones que se han vertido en este debate.

El Senador don Rafael Fernández-Piñar ha expresado su disconformidad, su legítima discrepancia con la ley. Lo ha hecho utilizando algunas expresiones castizas quizá, aunque es buen andaluz, porque estamos en unas fechas muy madrileñas, pero creo que no está en su ánimo ni mucho menos crear una polémica difícil, ni creo que teniendo en cuenta algunas de las expresiones que ha utilizado él mismo tenga fe en lo que ha dicho. Ya el señor Laborda ha hecho referencia a eso que ha dicho respecto a que el Grupo Popular es satélite del Grupo Socialista; creo que esa fórmula es un poco complicada de aceptar. Tal vez se refería a que las discusiones, las polémicas, las confrontaciones duras, a veces para él pueden estar dentro de lo que llaman hoy la «guerra de las galaxias», pero no pienso, repito, que crea mucho en ello.

Lo fundamental de su intervención —yo quisiera intentar disuadirle no tanto de su ánimo, porque creo que no tiene mucha fe en eso, sino en lo que pudiera ser utilización para que otros reproduzcan algunos de los conceptos—, lo fundamental, repito, es que ha establecido dos criterios que le mueven a la discrepancia. En primer lugar ha dicho que esto significa la consolidación del bipartidismo, que éste es un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Tengo la impresión de que la fuerza de los hechos va más allá de las propias argumentaciones que utilizamos. Han subido a la tribuna representantes de los cuatro Grupos Parlamentarios de esta Cámara (excluido el Grupo Mixto en cuyo nombre él ha hablado, pero supongo que no representando a todo el Grupo), y en los cuatro Grupos que componen la Cámara, excluido, repito, el Mixto, se ha visto el ánimo de contribución, de acuerdo, de consenso respecto de la ley. Es muy difícil convencer a nadie, aunque sólo fuera a los profesionales de los medios de comunicación para que lo repitiesen, es muy difícil convencer, insisto, de algo que los hechos están negando paladinamente en el propio desarrollo de esta sesión. Pero ha expuesto algo que tiene más fondo, más importancia.

Después de hacer una serie de referencias a cosas que no tienen nada que ver y de arrogarse la única continuidad en la representación de los trabajadores —por lo menos tendrá que reconocer que es una representación limitada en el número—, ha sostenido algo que creo que es lo más importante: que esta ley no da igualdad de oportunidades porque no ha avanzado en la consecución de la proporcionalidad que él cree debería realizarse, aunque ha dicho que la proporcionalidad total no es posible.

Supongo que lo habrá dicho no en términos teóricos, sino en términos prácticos, porque la Constitución ya establece una limitación que impide la proporcionalidad pura. Si no hubiera esa limitación, la proporcionalidad pura sí podría existir. En nuestro caso no, porque la Constitución, insisto, ya limita con algunas prescripciones, señalando el mínimo que establece por cada provincia. Quisiera disuadir a las señoras y los señores Senado-

res de ese criterio, si en la mente de alguien anida después de oír las explicaciones, legítimas, desde luego, del Senador Fernández-Piñar. No es cierto que se pueda decir que esta ley no da igualdad de oportunidades. Sí se puede decir que se podría haber aumentado el grado de proporcionalidad. Sí se puede, porque es cierto. Yo, en la presentación, lo he reconocido. Incrementar de 350 a 400 aumenta la proporcionalidad. Son 50 más a repartir proporcionalmente a la población. Y reducir el mínimo de dos, actualmente en vigor, a uno aumenta la proporcionalidad. Por tanto, el señor Fernández-Piñar tiene toda la razón cuando dice que se podría haber incrementado la proporcionalidad. No la tiene en absoluto cuando dice que el no haberlo hecho resta, impide, la igualdad de oportunidades. Ello no es cierto y se lo voy a demostrar con cifras para que no crea que son mis puntos de vista personales.

El señor Fernández-Piñar ha hecho una equiparación que no es justo que se haga, porque falsifica la realidad. Ha establecido que para un partido basta con, por ejemplo, 4.000 votos para sacar un Diputado o un Senador, y que otro partido necesita 30.000. Ello es cierto, pero al propio tiempo es falso, porque el señor Fernández-Piñar elige, para el partido que obtiene un escaño con 4.000 votos, una provincia pequeña, y para el partido que necesita 30.000 para el escaño elige una provincia grande. Eso no se puede hacer. Es preciso elegir para los dos ejemplos Soria o para los dos ejemplos Madrid. No se puede jugar con las dos cifras y decir que el Partido Socialista, por ejemplo en Soria, un Senador lo obtiene con 10.000 votos, y él necesitó en Madrid 100.000 para obtenerlo. Cite usted Soria o Madrid para que podamos saber que no estamos hablando de lo mismo, a ver cuántos votos hubiera podido un grupo político cualquiera elegir en Soria respecto de otro, o en Madrid respecto de otro, y no mezclando las provincias, que, evidentemente, es una cierta trampa en la utilización de las cifras.

Pero le voy a dar algunas otras cifras mucho más reveladoras. Es verdad que, debido a la desproporcionalidad que establece la Constitución y el Decreto-ley en vigor y que continúa esta ley, unos partidos políticos, teniendo un porcentaje de votos equis, obtienen un mayor porcentaje de representación en las Cámaras, y que otros, teniendo un porcentaje de votos, obtienen un menor porcentaje en las Cámaras, siempre en unos límites bastante reducidos de plus o de penalización. Pues bien, les voy a decir, señoras y señores Senadores, qué ocurriría si nosotros utilizáramos el procedimiento que el señor Fernández-Piñar abonaba de incrementar a 400 el número de Diputados, que proporcionaliza sin duda, y de reducir a uno el mínimo por provincia, que también proporcionaliza sin duda. ¿Qué ocurriría? Les voy a decir exactamente en qué cambiaría (si lo hacemos con algunos datos, que no me los invento, utilizo los del 28 de octubre de 1982), en qué cambiaría, repito, cada una de las formaciones políticas en el Congreso si se utiliza la proporcionalidad.

El Grupo Socialista reduciría en un 0,7 su presencia en

la Cámara; el Grupo Popular reduciría su presencia en la Cámara en 0,8; el actual Grupo Centrista, que responde a un anterior Partido de UCD, en la Cámara del Congreso aumentaría su presencia en un 0,3; los miembros del Grupo Mixto, del Partido Comunista, en el Congreso aumentarían su presencia en un 0,6; los miembros del Grupo Mixto del CDS aumentarían en un 0,1; Convergencia i Unió aumentaría un 0,8; el Grupo de Minoría Vasca disminuiría, con el procedimiento que abona el señor Fernández-Piñar, en un 0,04 —ya estamos en unos límites casi infinitesimales—; el miembro del Grupo Mixto de Euskadiko Ezkerra aumentaría un 0,2, y el de Esquerra Republicana disminuiría un 0,03. Sumando todos los cambios que se darían en el Congreso de los Diputados si atendiéramos a los principios que nos solicita el señor Fernández-Piñar, ello supondría una variación de un 1,9 del total de los Grupos. La Cámara cambiaría su fisonomía, su panorama en un 1,9, pongamos un 2 por ciento, es decir, no va a cambiar; la mayoría no va a ser del Partido Comunista o, incluso, del Grupo Popular, etcétera; la Cámara cambia en un 2 por ciento. Es verdad lo que dice de que proporcionalizaría más —acabo de reconocerlo—, pero no en un 20, en un 5 o incluso en un 1 por ciento, sino en un cero coma por ciento.

No lleva razón cuando habla de que se elimina la igualdad de oportunidades, aunque, para ser justos en todo, hay que decir que se incrementa más. Y yo también, usando ese casticismo español que él utilizaba cordialmente al referirse al refrán de «Obras son amores...», diré que las leyes electorales no hacen ganar unas elecciones, sólo las empujan en un cero coma por ciento, o, si se hacen trampas, en un 5 por ciento, con leyes electorales que formen distritos salchicha, como saben ustedes que se ha hecho en experiencias anteriores en otros países o también como ha relatado el representante del Grupo Popular, con algunas experiencias españolas pasadas. Yo creo que las leyes se ganan con votos; «votos son amores y no buenas razones». Hay que tener votos y es muy legítimo buscarlos, pero no se puede desfigurar lo que en realidad sucede.

El señor Oliveras, de Cataluña al Senado, ha señalado la contribución, que viene de lejos, de su homónimo en el Congreso de los Diputados y de los partidos políticos que dan lugar a algunos de los grupos. Esta colaboración repito que viene de lejos, porque yo no he querido reseñar antes que las consultas a los partidos políticos que tienen representación en las Cámaras comenzaron antes de que el Gobierno elaborara ni uno solo de los artículos de esta ley. Personalmente, en nombre del Gobierno, mantuve entrevistas con todos y cada uno de los partidos políticos con representación en las Cámaras, con objeto de establecer unos principios iniciales y generales antes de que el propio Gobierno elaborara su proyecto de ley. El señor Oliveras, por tanto, ha manifestado la contribución que su Grupo aquí y su homónimo en el Congreso de los Diputados han hecho, y yo se lo agradezco; porque podría hacer más todas y cada una de las palabras pronunciadas por su señoría.

El Senador Renobales, del Grupo Nacionalista Vasco,

ha manifestado su acuerdo con la ley y su voluntad de perfeccionamiento, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. No he dicho antes, y quiero reflejarlo ahora por pura honestidad, que cuando nosotros elaboramos esta ley tuvimos en cuenta la Ley que el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca había elaborado, porque técnicamente era una ley impecable. Es verdad que el Gobierno la impugnó en materia censal —que creo que en este proyecto resolvemos definitivamente—, pero era un proyecto muy bien elaborado, repito, desde el punto de vista técnico, al margen de las discrepancias que desde el punto de vista político pudieran existir. Y ese esfuerzo, ese trabajo, se ha visto claramente reflejado en las enmiendas que al Congreso y al Senado presentó el Grupo, derivadas del Partido Nacionalista Vasco, enmiendas cuyo número se vio mayoritariamente aceptado en el Congreso de los Diputados, porque técnicamente estaban, digo, muy bien elaboradas, tanto allí como en el Senado.

También ha manifestado una cierta preocupación respecto de la mayor claridad que pudiera haber en el texto de la ley con relación a algunas competencias o potestades que figuran en el Estatuto de Autonomía y que ampara y permite la Constitución.

Su señoría conoce muy bien, porque creo que incluso ha subido a la tribuna con el texto, la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 30 de mayo de 1983, que establece con absoluta claridad cómo la Ley de Régimen General Electoral comprende una serie de procesos electorales y establece muy bien aquellos otros que no están incluidos. El Tribunal Constitucional lo deja perfectamente claro cuando habla de los Senadores que son representantes de las Comunidades Autónomas y que los elige la Comunidad Autónoma por el procedimiento que la misma establezca, y de la elección del legislativo de cada Comunidad Autónoma que, evidentemente, cada Parlamento autónomo tiene la potestad de elegir. También habla de las excepciones que se puedan dar en los regímenes locales y hace referencia específica a lo relativo a la legislación electoral que afecta a las juntas generales y Diputaciones forales, tal como establece el artículo 10.3 y el artículo 37.3, letra e), del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pues bien, todo eso está recogido en el actual artículo 209, que antes fuera 208, de este proyecto de ley, así como en la disposición adicional primera, en su punto primero. Es decir, que yo creo que esa preocupación no debería existir, porque tanto la sentencia del Tribunal Constitucional como el propio proyecto de ley recogen con claridad esa singularidad que expresaba el señor Renobales, que ha manifestado también su acuerdo general con la ley.

Igualmente, el señor Reigada Montoto ha manifestado su acuerdo con el consenso logrado en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, distinguiendo quizá dos cuestiones que ha señalado específicamente y que preocupan a los miembros de su Grupo, como es la posición en que quedan aquellos miembros de la Administración militar, si después de concurrir a un proceso electoral

pueden o no volver a las instituciones profesionales, a las instituciones militares.

El señor Reigada Montoto tiene plena conciencia de que este es un problema harto difícil, porque si bien la condición de ciudadano normal, como otro funcionario de cualquier Administración, sea civil o militar, nos llevaría a garantizar la igualdad en este tratamiento, también sabe S. S. el específico interés, que procede de un mandato constitucional y de una voluntad política de todos los Grupos que hoy tienen apoyo popular, de mantener una despolitización en todas las Administraciones del Estado, y radicalmente en la militar, lo cual podría entrar en una cierta contradicción con el otro planteamiento que hacía su señoría.

En el tema de las incompatibilidades hemos recogido una ley ya aprobada, como advertía y hemos introducido una modificación, justamente en el sentido de la intencionalidad que manifestaba S. S. en nombre del Grupo Popular, que es la de flexibilizar las incompatibilidades en el caso de las enseñanzas universitarias para no perder el depósito o el contenido de sabiduría que puede haber en los profesores que además ejercen una actividad política en el Senado o en el Congreso de los Diputados.

Como ha dicho también en el mismo sentido el señor Laborda, quiero repetir aquí que esta es una ley muy ampliamente consensuada, con las legítimas discrepancias que son mucho menores en el Congreso de los Diputados —y veo que también en el Senado— respecto al conjunto que le apoya. Y como digo son legítimas porque sostienen principios que pueden ser erróneos o acertados, algunos incluso yo los he calificado aquí como de acertados, pero no se pueden sacar conclusiones que desfiguren la realidad, no se puede sacar la conclusión de que esta ley no mantiene el apoyo muy mayoritario, muy amplio de la inmensa mayoría de los representantes españoles, Diputados y Senadores, que deben elaborar un instrumento al servicio de todos en el ejercicio y en el esfuerzo de la consolidación democrática. *(El señor Fernández-Piñar pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Qué desea, señor Fernández-Piñar?

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Señor Presidente, ¿podría utilizar un turno breve?

El señor PRESIDENTE: Por un tiempo de tres minutos, señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: He pedido este turno para, por una parte, tener la oportunidad de matizar algunas cosas de las que ha dicho el señor Vicepresidente y, por otra, anunciar mi intención en cuanto a la defensa de las enmiendas, que yo creo que puedan quedar suficientemente explicadas en cuanto a la filosofía y las cuestiones de fondo, que son las que interesan en estas primeras intervenciones.

Cuando antes comenté que el Partido Socialista, el Go-

bierno —porque cuando se habla de Partido Socialista fundamentalmente hay que hablar de Gobierno— había satelizado a la oposición, no iba tan lejos como el señor Reigada, que ha llegado a hablar de matrimonio. Es decir, que esta ley ha sido como un matrimonio, que uno tira para el Este y el otro para el Oeste, pero al final van unidos. No pensamos que el bipartidismo acabara en matrimonio. No es cierto que el bipartidismo se exprese en esta ley, porque el Grupo Vasco y el Catalán la apoyan también. Lo cierto es que en nuestro país hay un bipartidismo corregido en determinados ámbitos electorales, en los cuales el compañero del Partido Socialista no es Coalición Popular, sino que en el caso vasco es el PNV, y en el caso catalán Convergencia, me refiero a Convergencia i Unió, no a la convergencia que quieren hacer otros. *(Risas.)*

En cuanto al tema de la proporcionalidad, lo que he dicho y mantengo es que la Constitución mandata seriamente que la Ley Electoral debe ser proporcional. Yo decía que la proporcionalidad perfecta no se puede dar no sólo por las limitaciones constitucionales de la circunscripción provincial, sino también porque en términos matemáticos es imposible. Sería una absoluta casualidad que los votos de una circunscripción provincial dieran números enteros de Diputados. Es prácticamente imposible, aunque si el señor Guerra sigue haciendo maravillas puede que lo consiga algún día. *(Risas.)*

Según interpretamos nosotros la Constitución —que creo que es lo razonable—, ésta mandata que la proporcionalidad debe ser la máxima posible y, matemáticamente hablando, la regla D'Hont se aleja con mucho de ese criterio. Hay otros que, respetando la circunscripción provincial, se aproximan mucho más al espíritu de la Constitución, que es la proporcionalidad.

No estoy tan de acuerdo, señor Guerra, en que haya que comparar votos de Soria con votos de Soria, porque otra cosa que decimos que se debe conseguir es la igualdad de votos. Un español de Soria no puede tener un voto que valga por tres españoles de Madrid, y realmente ocurre así. El voto de un español de Soria vale tres veces más que el de un español de Madrid, a efectos de representación parlamentaria, de tal manera que un español de Madrid, si quisiera tener un representante en el Parlamento, tendría que votar tres veces para que fuera homogéneo con el de Soria. Creo que esto no es correcto.

Decía el señor Vicepresidente que los resultados cambiarían muy poco, pero S. S. sólo atiende al tema del mínimo provincial, uno en vez de dos y 400 en vez de 350. Pero nosotros le planteamos otro sistema, que no es la regla D'Hont. Si usted sumara la influencia sobre la proporcionalidad de los tres criterios, sin duda no le daría un uno y pico de modificación. A mayor proporcionalidad le daría mucho más.

Le he puesto el ejemplo del Partido Socialista y el Partido Comunista. Diez veces más de votos el Partido Socialista que el Partido Comunista y 50 veces más de Diputados. Ya sé que sería imposible conseguir la proporcionalidad perfecta, pero esa distancia, en mi opinión, se

aleja más de lo tolerable, de lo razonablemente admisible, del mandato constitucional.

En relación con mis enmiendas, señor Presidente, las doy por defendidas todas ellas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Guerra González): Muchas gracias, señor Presidente.

Como se dice ahora, por cortesía parlamentaria contesto al Senador Fernández-Piñar, que ha hablado algunas veces con gracia, y quisiera contestarle con ánimo dialogante y cordial.

Ha hablado de la satelización, incluso del matrimonio. Dice que al hablar del Partido Socialista hay que hablar del Gobierno. Ha interpretado que hablar de matrimonio quiere decir matrimonio unido. Pienso que él, estando en el Partido Comunista, debería hablar más de divorcio que de matrimonio. Sería más lógico. *(Risas.)* Ha hablado, incluso, de dos Convergencias y ha dejado en el aire una segunda a la que podría estar refiriéndose negativamente.

El señor Fernández-Piñar se lamenta de que en España, por los resultados electorales, haya un bipartidismo corregido, es decir, que hay dos partidos que tienen muchos votos y otros que tienen votos, pero menos, a diferencia de estos dos primeros.

El bipartidismo o el multipartidismo lo deciden los electores, y creo que el Partido Comunista no tendrá entre sus principios el de modificar la voluntad de los electores en una urna o en un ordenador. Si la gente dice dos partidos, cuatro o cinco, me imagino que el señor Fernández-Piñar respetará que sean dos, cuatro o cinco. Otra cosa es que su Grupo nunca esté en el bipartidismo en este país y que les toque a otros. Pero las cosas son como son, la gente vota lo que cree que debe de votar.

La Constitución española no dice la máxima proporcionalidad posible. No es verdad. Establece el principio de la proporcionalidad. Eso es lo que dice la Constitución, y esta ley, evidentemente, es proporcional. Si fuera mayoritaria, probablemente las enmiendas del señor Fernández-Piñar serían diferentes.

Voy a romper una lanza técnica en favor de un señor que se llama D'Hont. El señor D'Hont no es contrario a la proporcionalidad; no nos equivoquemos. Lo que puede desproporcionar, y es en lo que insiste el señor Fernández-Piñar, es que en España no hay un distrito, sino 50. ¿Cómo se puede decir con seriedad que el Partido Socialista, con diez veces el número de votos del Comunista, saca 50 veces más el número de Diputados? No es un distrito único, señor Fernández-Piñar. Aplique usted un poco de conocimiento técnico a lo que está diciendo. Son 50 distritos, más otros dos. Entonces, no es posible que 10 veces el número de votos sea 50 veces el número de Diputados. Son 50 distritos, repito, más dos para el número de votos a repartir. Tendría que ser un distrito único para que S. S. pudiera estar legitimado a compa-

rar uno o dos millones de votos con tantos Diputados o tantos Senadores. De lo contrario no tiene usted legitimidad moral para decirlo. Usted lo sabe. Si España está dividida en 50 distritos, más Ceuta y Melilla, no es posible hacer la comparación, no tiene sentido.

La división que existe entre lo que vale un voto en Soria y en Madrid es cierta, está en la Constitución, porque hay unos mínimos ya que modulan la proporcionalidad. Bien es verdad que se obvia un poco en décimas, según el procedimiento que de las enmiendas del señor Fernández-Piñar podría obtenerse. Su señoría ha dicho, y es verdad, que yo he hablado de que al incrementar a 400 y reducir el mínimo a uno, la Cámara cambia en un 1,9 o en un 2 por ciento; es verdad. Pero yo creo que el método D'Hont no lo podemos eliminar, porque opino que es de los métodos más democráticos que hay en el mundo, quizá sea el que más resultados democráticos ha dado. Sin embargo, si lo cambiamos por la proporcionalidad pura, excluidas las limitaciones de la Constitución, el cambio total en el Congreso de los Diputados es del 3,5; o sea, que del 1,9, casi 2, pasa exactamente al 3,5.

Como comprenderá S. S., la Cámara no cambia de rostro ni de panorama, aunque es verdad que se acerca más a la proporcionalidad. En eso le doy cincuenta mil veces la razón. En cambio, no lleva ninguna razón cuando dice que se cambia la igualdad de oportunidades. No es verdad. Hay que tener los datos concretos, porque de este tema electoral habla mucha gente, pero pocos se leen los papeles. Hay que leer los papeles, hacer números o meterlos en un ordenador personal (que hoy tiene cualquier persona en su casa), porque comparar huevos con patatas no es un buen sistema. Hay que comparar las cosas en sí mismas.

Por tanto, creo que el señor Fernández-Piñar lleva razón al decir que sus enmiendas se aproximan más a esta proporcionalidad. No lleva razón cuando dice que tiene una incidencia política en España; no la tiene ni en el Congreso ni en el Senado. Tienen una incidencia insignificante desde el punto de vista teórico, que lleva a los posicionamientos del propio Partido Socialista, aunque no los ha establecido en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener una ley que no es discutida desde el punto de vista de legitimidad moral en España, que sacar dos Diputados más. Yo prefiero perder dos Diputados y tres Senadores que no tener una ley electoral de la que media Cámara diga que no está legitimada moralmente, porque eso destruye el sistema democrático. Por eso sacrificamos esos escaños y continuamos con el sistema D'Hont.

Es cierto que prefiero cuatrocientos y el mínimo uno. ¿Cómo no lo voy a preferir si con ello puedo eliminar alguna disfuncionalidad de la proporcionalidad? ¿Cómo no lo voy a preferir si beneficia a mi propio partido? Además, eso va a favor de los principios del sistema de proporcionalidad, de los principios de proporcionalidad que yo tengo y que tiene mi propio partido. Lo que pasa es que por dos Diputados o dos Senadores, insisto, yo no cambio la situación de una ley que es apoyada por el 98 por ciento de una Cámara, porque eso significa la estabi-

lidad en el sistema electoral de España, y me parece muchísimo más importante que sacar dos más o dos menos. Para otros partidos esto puede ser diferente. (*Aplausos en los escaños de la izquierda.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el preámbulo, que no tiene votos particulares.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 179; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El Título Preliminar tiene una enmienda del Grupo Mixto, que se ha dado por defendida.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Pasamos a la votación de la enmienda número 25, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, uno; en contra, 180; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del texto del dictamen.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, 182; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Entramos en la discusión del Título I. Tiene la palabra el señor Zavala, del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos, para defender sus 56 enmiendas.

Título I
Artículos
2.º al 153

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Es la enmienda 79, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Yo tengo las enmiendas 80 a 137. Voto particular número 1, enmienda 79.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: La enmienda 79 es al artículo 1.1.b).

El señor PRESIDENTE: Pues no aparece. No debe de haberla reservado S. S., porque en el «Boletín» la primera enmienda que reserva en el voto particular es la 80.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Debe de haber algún error.

El señor PRESIDENTE: Puede haber error en la transcripción o error de S. S., que la haya omitido en el escrito. Vamos a comprobarlo.

Se suspende la sesión durante diez minutos, para efectuar la comprobación. (*Pausa.*)

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señores Senadores, continúa la sesión.

Señor Zavala, lamento decirle que no fue reservada, probablemente por error, la enmienda número 79.

Tiene la palabra el señor Zavala para defender sus enmienda al Título I.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Señor Presidente, señorías, voy a defender la enmienda número 80, al artículo 8.º, 2. Esta enmienda propone la modificación de dicho apartado 2 del artículo 8.º del proyecto, quedando como sigue: «Integran la Administración Electoral la Junta Electoral Central, de Comunidad Autónoma donde existiere, Provincial o de Territorio Histórico, de Zona, así como las Mesas Electorales». Este es el contenido de nuestra enmienda.

La razón es meramente mejorar la ley con una mayor precisión terminológica, haciendo jerarquizar a los distintos órganos de la Administración territorial de arriba para abajo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Da por defendidas las restantes enmiendas a este Título? Este Título comprende hasta el artículo 153.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Las doy por defendidas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para defender las enmiendas «in voce» a los apartados 4 y 5 del artículo 7.º del proyecto.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente, subo a defender, en nombre de mi Grupo, esta enmienda al artículo 7.º por considerar que hay un vacío legislativo en nuestro país en relación con la regulación de los derechos y libertades de todos los españoles. Agradezco especialmente al señor Vicepresidente del Gobierno las palabras que tuvo en relación con el tema de que trata esta enmienda, enmienda que va a intentar extender el derecho al ejercicio de estas libertades y estos derechos por parte de los militares, y agradezco explicaciones que, lógicamente, son las que han impedido que hasta el momento pueda haberse resuelto este tema pendiente después de los años que han transcurrido desde la Constitución.

El tema de por sí es muy importante y nos parece que no puede ser resuelto con la consideración de que todavía es bueno mantener despolitizados a los militares. Nos parece que esto hay que centrarlo dentro del cuadro de derechos y deberes de todos los españoles; nos parece también que hay que encajarlo dentro del cuadro de situaciones en que los militares de los distintos países democráticos con los que estamos unidos en razón de tratados, de alianzas y de integraciones económicas manifiestan para sus propios militares; hay que entenderlo también en relación con toda la historia pasada de nuestro país y hay que entenderlo también en razón de las dispo-

siciones que hasta el presente se han dictado sobre este particular.

Si hacemos defensa de esta situación en relación con esta ley es porque en ella misma otro colectivo de funcionarios, tratado por la Constitución en igualdad de condiciones a como se trata a los militares, concretamente en el artículo 70 —letra d) para el grupo de funcionarios que son fiscales, magistrados y jueces, y letra e) para el grupo de funcionarios que son militares—, precisamente para este primer grupo —el d) del artículo 70 de la Constitución—, sí que se establece en este proyecto de ley una regulación concreta respecto a su participación. Parece, por tanto, que ignorar al siguiente grupo, el e), es algo que, de entrada por lo menos, manifiesta una cierta cara de diferenciación, una cierta cara de marginación.

Las Reales Ordenanzas que se aprobaron después de la Constitución, en su artículo 211 vienen a decir que los militares que vayan a participar de alguna manera en la política pasarán a la situación que señale la ley, que determinará —en futuro— los efectos que sobre su propia carrera esta situación pueda realizar.

Hasta el momento en que la Constitución entra en vigor hay una regulación, la Ley 10/1977, que es la que impide que los militares puedan participar como electores pasivos en la política general de nuestro país; pero, una vez que aparece la Constitución, con su regulación, y las leyes posteriores, cualquier situación anterior debe de ser acomodada de forma inmediata a estos preceptos constitucionales.

A esto vienen las Ordenanzas en este artículo 211, que se prolonga, además, en la disposición final segunda de las mismas Ordenanzas, en la que se dice que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley (es decir, las Reales Ordenanzas), el Gobierno deberá dictar normas de desarrollo relativas al ejercicio de deberes y derechos individuales.

En Derecho comparado podemos decir que desde la Constitución de Cádiz, en 1812, hasta el año 1939, en todos los Parlamentos nacionales hubo siempre militares, con una regulación adecuada en cada circunstancia, pero hubo siempre militares. Posteriormente, hasta 1977, también. En la II República, concretamente, varios militares fueron miembros del Congreso de los Diputados.

En cualquier país occidental de los del área en que nosotros nos desenvolvemos y de los que decimos que participamos de la misma clase de filosofía política y de entendimiento democrático, cualquiera de estos países tiene regulado perfectamente este procedimiento, y en todos ellos hay siempre una cláusula de retorno en condiciones que varían según el país de que se trate.

En cuanto al colectivo de jueces, magistrados y fiscales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está en tramitación todavía en las Cámaras, atiende en profundidad este tema a través de sus artículos 357, 358, 359 y 362.4, de tal manera que el artículo 357, por ejemplo, fija que han de pasar a la situación de servicios especiales; el 358 fija los efectos de esta situación de servicios especiales sobre su carrera, donde se les respetan, se les consolidan realmente, todos los derechos que en la misma tienen; el

artículo 359 se refiere a cargos de nombramiento por decreto, y el 362.4 llega a precisar hasta el tiempo electoral, de tal manera que, para no comprometer excesivamente al miembro de la carrera judicial o fiscal, retirándole de la misma y pasándole a la situación de servicios especiales, permite un pase temporal a la situación de supernumerario, mientras se hace la campaña electoral.

Siempre que a esta Cámara llegó una ley donde podía tener cabida la regulación de la situación de los militares para el ejercicio de sus derechos y libertades, siempre fue enmendada de alguna manera; siempre se dijo también que no era el momento adecuado. Se dijo, por ejemplo, cuando la Ley de Reserva Activa; se dijo cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Defensa o la de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa, que es la correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, debió de haberse regulado en aquellos momentos, aunque entonces se contestó que no era la ley adecuada para ello. Parece ser que para jueces fiscales y magistrados sí lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero para militares no es ésta la Ley Orgánica que les pueda regular a ellos.

No resolverlo contradice preceptos tan importantes como estimamos que es el artículo 70 de la Constitución, o los artículos 9.º y 14, donde se dice que todos los españoles son iguales a todos los efectos, o el 23, donde se dice que todos pueden acceder en igualdad de condiciones a ejercer cargos políticos.

Vulnera también la situación presente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la ONU, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, en varios artículos, el 2.º, 7.º, 10, 18 y 21, donde se habla de que los derechos y libertades lo son sin distinción alguna, de la igualdad de la ley sin discriminación, del derecho a ser oído públicamente, de la libertad de expresión... El artículo 21.2, concretamente, define el derecho a participar en el gobierno de su país con un texto tan concreto como que toda persona tiene el derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública de su país.

¿Cuáles son los efectos de la no regulación, es decir, de no dar satisfacción a toda esta serie de disposiciones legales? En principio, los efectos personales a toda esta serie de afectados, son gravísimos, trascendentales, porque se encuentran mutilados desde el punto de vista de su condición de personas que quieren ejercer y vivir en democracia y, en segundo lugar, porque si desean participar más directamente como electores pasivos en la gobernación de su país, en ese momento tienen que renunciar a todas las situaciones que su carrera les permite.

Excluir al militar del Parlamento dificulta su prestigio e integridad democrática, le discrimina y le margina. Paradójicamente, el artículo 8.º de la Constitución, entre otras cosas, dice que se les asigna la misión de defender el orden constitucional, del cual, al no regular por el procedimiento adecuado este derecho a la participación pasiva, quedan marginados.

Todo esto nos parece que tiene efectos graves e importantes; un régimen democrático no debe producir marginaciones, sino respetar y contar con todos los colectivos sociales. Tampoco debe autolimitarse y prescindir de

parte de los españoles en una tarea tan seria y responsable como es la de acceder a la función pública, porque es empobrecer la propia función pública marginar a un determinado grupo de españoles de esta clase de funciones y de situaciones.

Privar a los militares del derecho de sufragio pasivo nos parece que no está en concordancia con la Constitución, es reducir a los militares a una situación de marginación. Nos parece que si en este momento no nos pronunciásemos, si nuestro Grupo no manifestase en esta circunstancia la necesidad de producir esta regulación, estaríamos olvidando algo que es enormemente importante y trascendente para todos, como es el principio de respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de los españoles, y también estaríamos produciendo un olvido, con grave deterioro para un colectivo nacional.

Por esto hemos presentado la enmienda número 2, por esto es por lo que hay dos enmiendas alternativas a la número 2; la primera de ellas para añadir un número 5 al artículo 7.º, donde se determina la forma y la situación en que queda afectada la carrera militar en razón de su participación en la política. Por si esto fuera demasiado preciso y no pudiera resolverse en estos momentos, hay una segunda enmienda alternativa, sobre la que yo creo que no habrá dificultades para que sea aprobada en esta Cámara, que consiste en establecer un plazo, no de tres meses, como dicen las Reales Ordenanzas, sino de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, para que por el Gobierno se envíe a las Cortes el proyecto de ley correspondiente que regule los derechos y libertades de los militares.

Estimamos que esto es serio, estimamos que esto es importante, estimamos que merece la consideración de esta Cámara y del Gobierno también. Esta regulación es urgente, es necesaria y no puede prolongarse por más tiempo el que no se dicte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bosque Hita.

Para turno en contra tiene la palabra el señor Cabrera. (El señor VICEPRESIDENTE, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.)

El señor CABRERA BAZAN: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Vicepresidente del Gobierno —perdón por el orden de cita—, señor Bosque Hita, a nosotros no nos consta que los militares tengan ese interés que usted alega aquí respecto de la situación que usted reclama para ellos, más bien lo contrario. Pero yo entiendo bien que usted siente la tesis de que el texto discrimina a los militares, y en eso basa usted su alegación. Usted cita una serie de artículos de la Constitución, respecto de lo cual habría que decir que son tantos los que usted ha indicado que, a la postre, hemos reconducido la Constitución a un mandato tan abstracto que sirve para todo.

No obstante, yo me voy a fijar fundamentalmente en el artículo 70, que constituye la base de su alegación. El artículo 70 de la Constitución señala, en concreto en el

apartado e), que la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso —referencia concreta en su apartado e)—, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

Dice usted: ¿Por qué no se les equipara? No se les equipara, ni hay por qué ni se infringe el artículo 70, porque, aunque estén incluidos en el mismo apartado, no quiere decir que la regulación de estos Cuerpos tenga que ser simultánea. Se puede regular por una parte el régimen de los militares y por otra el de los Cuerpos que se citan a continuación, concretamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. Ello es así fundamentalmente porque esas Fuerzas están integradas por funcionarios civiles, mientras que los militares son funcionarios militares. Hay una distinción, un matiz que es preciso tener en cuenta, y es el matiz que contempla el texto que aquí se debate.

A continuación cita usted también una serie de artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es verdad lo que usted dice; es verdad que hay una equiparación y una serie de aspectos positivos para un conjunto de funcionarios civiles también, señor Bosque. Pero hay sus excepciones, y concretamente hay una excepción en la Ley Orgánica del Poder Judicial que favorece a los militares. No sé si usted ha leído el artículo 34, dentro de un régimen general que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se hace tabla rasa de las jurisdicciones especiales, mantiene sin embargo para los militares el siguiente régimen especial que les favorece; en este orden civil, en el orden civil general que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece una excepción para los militares y señala que corresponderá a la jurisdicción militar —sigue correspondiendo ahora a la jurisdicción militar— la prevención de los juicios de testamentaria y «ab intestato» de los miembros de las fuerzas Armadas muertos en campaña o navegación; formación de inventarios; seguridad de los bienes y entrega de éstos a quienes aparezcan como herederos sin hacer declaración de derecho.

Usted ha citado normas muy abstractas, muy genéricas, primero de la Constitución y luego de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ésta tan concreta que favorece excepcionalmente a los militares la ha pasado usted por alto.

Pero hay más. Nosotros tenemos un muy alto concepto de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos exactamente el concepto que tiene de ellas el artículo 8.º de la Constitución, porque tampoco es raro el señalar que nosotros somos constitucionalistas a tope y el artículo 8.º de la Constitución dice concretamente que las Fuerzas Armadas, constituidas..., tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esta es una alusión muy clara a la profesionalidad de los militares y en esa línea es en la que se mueve el texto y en la que nos movemos nosotros también.

Nosotros creemos —y ésa es una idea que está inserta

en el núcleo de la sociedad y se puede demostrar sociológicamente— que los militares son unos profesionales encargados de la defensa del territorio nacional y del ordenamiento constitucional. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que pensemos que quienes son militares actualmente no pueden participar, si quieren, en las elecciones. Que participen; esa participación está abierta a todo el mundo, pero si es verdad que la Ley electoral no reserva para ellos lo que para los otros Cuerpos integrados por funcionarios civiles del Estado, ese matiz yo creo que merece la pena contemplarlo.

Plantea usted dos enmiendas «in voce» o alternativas, ahora no recuerdo muy bien, pero como lo hemos tratado en Comisión y creo que aún tengo tiempo, le contesto. Usted dice en una de las enmiendas alternativas «in voce» que a los militares profesionales en la situación correspondiente se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascenso. A la terminación del mandato para el que fueron elegidos podrán mantenerse en la situación correspondiente a voluntad de los interesados, hasta la constitución de la nueva asamblea parlamentaria. Esto está en relación con la enmienda que el Grupo Socialista ha introducido en Comisión en relación con la disposición adicional cuarta, que hace referencia a la suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores —que no de los militares— en relación con los artículos 41.5 y 48 del Estatuto de los Trabajadores. Digo esto porque la enmienda la hemos redactado los Ponentes; pero ese régimen no es posible aplicárselo a los militares. Está referido al contrato de trabajo civil y ordinario, no al régimen funcional en general ni en particular al de los militares. Ese es otro tema, señor Bosque.

Finalmente ha hablado usted de que en el plazo de seis meses el Gobierno envíe a las Cortes un proyecto de ley orgánica que regule los derechos y libertades de los militares con arreglo a los preceptos constitucionales. Me parece excesivo pedir que el Gobierno —ahora que está todavía en ciernes esta ley— reforme la misma. Esta ley tiene, por lo menos, vocación de perdurabilidad, esto no quiere decir, tampoco, que un día no se haga algo en algún sentido más o menos parecido a eso. Lo cierto es que las leyes, por lo menos ésta, son como el amor: eterno mientras dura.

En relación al Senador Zabala, creo recordar que la enmienda que ha defendido tiene relación con los artículos 23 y 149 de la Constitución y pienso que, con leerlos, basta para que no podamos aceptar su enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Gracias Senador Cabrera.

¿Potavoces que deseen intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente del Gobierno. Decía mi oponente que los militares no se han pronunciado sobre este particular. Le preguntaría cuál es el canal que tienen los mili-

tares para poder pronunciarse políticamente en algo: ninguno. ¿Cómo es posible que pueda alegarse eso? Hemos impedido que puedan tener alguna posibilidad de pronunciamiento; por tanto, no es posible decir que no se han pronunciado, no pueden hacerlo. Primera parte.

Segunda parte. Parece ser que para que un español pueda ejercer derechos, primero tiene que solicitarlo. Los derechos que reconoce la Constitución no son automáticamente aplicables a todos los españoles. Primero hay que ejercer una determinada clase de trámite, que es pedir que ese derecho se le pueda aplicar.

Las razones que usted ha dado no pueden compensar de lo que significa la pérdida de la aplicación de unos derechos fundamentales a todos los españoles, a un colectivo concreto, que son los militares.

Parece ser que somos distintos a como fuimos antes, por ejemplo en la II República, desde las Cortes de Cádiz hasta acá. Entonces sí era posible; ahora ya no lo es. Parece ser que somos distintos al resto de los países occidentales y europeos. Su señoría lo afirma. Sus razones tendrá para eso; pero no somos distintos, ni podemos ni debemos ser distintos.

Dice usted que el artículo 34 de la Ley del Poder Judicial les favorece porque cuando mueran en campaña resulta que toda la serie de operaciones alrededor de sus bienes se pueden realizar a través de la justicia militar en lugar de hacerlo civilmente por los procedimientos ordinarios y normales. Esa es una simplificación para todos. Cuando se muere en campaña no se está al lado ni de los deudos ni siquiera de los instrumentos que la sociedad tiene previstos para resolver esta clase de situaciones.

¿Su función no es compatible entonces por ser militares con la del resto de los derechos? Si lo es en otros países, y aquí en otro tiempo, ¿por qué no va a serlo aquí ahora?

La alternativa primera está basada en el artículo 358 del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, no en el artículo que ha citado S. S.

Parece excesivo que se regule en seis meses lo que en 1978 ya se encargó al Gobierno que hiciera en un plazo de tres meses. Aquello no significaba que fuera ya un condicionante para modificar las Reales Ordenanzas en un plazo de tres meses; era el desarrollo de las Reales Ordenanzas que no habían pensado en este problema de cómo resolver la aplicación de derechos y libertades de los militares.

El que nosotros aprobemos en este momento un plazo de seis meses, cuando llevamos desde 1978 con ese encargo a todos los Gobiernos de este país, no parece excesivo ni se puede decir que sea pretender modificar esta ley en seis meses. No lo es. Es dictar una ley distinta, que no tiene absolutamente nada que ver con ésta, que regule los derechos y deberes de los militares.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Senador Bosque, tendrá que reconocer que S. S. ha hecho un turno de rectificación más que un turno de portavoces.

El señor BOSQUE HITIA: Lo reconozco, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el Senador Estrella.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, Senador Bosque, ha planteado usted, finalmente, el debate en unos términos en los que yo, desde luego, no voy a entrar.

¿Cuál es la intención de esta ley? ¿Qué es lo que ha permitido que esta ley venga hasta nosotros en los términos en que viene? Precisamente, la búsqueda de que esta ley, que tiene voluntad de perdurar, pero al mismo tiempo voluntad de facilitar el juego democrático entre las fuerzas políticas, reciba el respaldo más amplio para lo cual —y se ha dicho antes en la presentación de la ley— las distintas fuerzas parlamentarias han tenido ocasión de renunciar a algunos de sus presupuestos.

Había un punto de partida común, que era que en esta ley no se podían introducir modificaciones sustanciales, salvo aquéllas que vinieran derivadas de la propia experiencia de la ejecución de la ley, respecto del texto con el que habíamos venido funcionando en anteriores elecciones.

¿Y qué es lo que hace esta ley? Sencillamente, recoger lo que es nuestra práctica, lo que son nuestros hábitos socioculturales en los últimos años, que están reflejados en la ley anterior y que vuelven a estarlo aquí. Recoger, en definitiva, actitudes sociales ante el hecho electoral que están generalizadas, en este caso concreto, no sólo entre el conjunto de la población, sino particularmente dentro de las propias Fuerzas Armadas, donde existe una actitud en el sentido de que el militar no debe participar activamente en la política.

El caso singularizado no me sirve de modelo. Aquí tenemos la experiencia de cómo S. S. —por quien siento un gran afecto— enarbola con cierta frecuencia banderines de enganche, se lanza un poco a la carga, pero luego resulta que, cuando vuelve la vista atrás, detrás está el vacío, está la nada, porque no hay nadie, salvo sus compañeros de Grupo que se sienten solidarios, que esté siguiendo esos planteamientos que está defendiendo. Ya ha ocurrido antes y estoy convencido, me consta, de que también ocurre ahora. Se abre un debate que no existe fuera del debate que estamos manteniendo entre usted y yo o entre usted y mi compañero.

Constitucionalidad de la ley y de este precepto en concreto. Absoluta constitucionalidad sin reservas. Así lo manifestaron también, con su voto, en el Pleno del Congreso, mi Grupo Parlamentario y el suyo propio, al aprobar este artículo sin ningún tipo de reserva.

En consecuencia, nuestro Grupo, entendiéndolo que no existe discriminación alguna, sin singularización, como existe en otros colectivos también en algunos aspectos de la ley, va a mantener su posición en esta enmienda.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias.

El señor BOSQUE HITTA: Pido la palabra, señor Presidente, por el artículo 87.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): La tiene S. S. por dos minutos.

El señor BOSQUE HITTA: Me sobra tiempo, señor Presidente. Es, simplemente, para decir que nadie ha dicho que esta ley sea inconstitucional; que nadie ha dicho que en este momento estemos pretendiendo modificar sustancialmente el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios alrededor de esta ley.

Lo que yo he dicho —y lamento que se haya podido entender de otra manera— es que la situación de los militares en estos momentos no está ajustada a términos constitucionales, lo cual es muy distinto de lo que se acaba de decir. *(El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El Senador Estrella, para duplicar, tiene la palabra.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Blanco es, la gallina lo pone. Señor Presidente, entiendo que con eso lo que estaba diciendo, precisamente, era que existían ciertos visos de inconstitucionalidad en este artículo, y lo sigo entendiendo igualmente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a votar. *(El señor García Royo pide la palabra.)*

Señor García Royo.

El señor GARCIA ROYO: Una cuestión de orden. Cuando llegue el momento de votar el texto del dictamen, le agradecería, señor Presidente, que me diera la palabra para decir qué excepción vamos a hacer en el artículo 7.º, número 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Así lo haré.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos. ¿Votamos agrupadamente todas ellas? *(Asentimiento.)* Vamos a votar, pues, todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 171; a favor, seis; en contra, 163; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Mixto. ¿Se pueden votar agrupadamente?

El señor CASTRO CORDOBEZ: Señor Presidente, con excepción de la enmienda número 1 al artículo 201, que la queremos separar del bloque de enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Ese es el Título IV, y estamos votando el Título I.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Es que queremos matizarlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Su señoría comprenderá que no voy a retener hasta el Título IV lo que S. S. desea.

Al Título I votamos agrupadamente las enmiendas del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, siete; en contra, 163.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan rechazadas.

Senador Bosque, ¿las enmiendas «in voce» que ha defendido S. S. se votan separadamente?

El señor BOSQUE HITTA: Rogaría, señor Presidente, que se votase una después de otra. Primero la número 2, la primera alternativa, y luego, la segunda alternativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a votar la enmienda número 2, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 171; a favor, 30; en contra, 139; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda rechazada.

Vamos a votar la enmienda «in voce» al número 5 del artículo 7.º.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, 32; en contra, 138.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda rechazada.

Tiene la palabra el señor García Royo para la especificidad de los artículos.

El señor GARCIA ROYO: Quisiera la excepción de voto al punto cuarto del artículo 7.º.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Es la única excepción? *(Asentimiento.)*

Vamos a votar, en primer lugar, agrupados todos los artículos, del 2 al 153, excepto el artículo 7.º, según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan aprobados.

Vamos a votar el número 4 del artículo 7.º, según el dictamen de la Comisión.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 171; a favor, 139; en contra, uno; abstenciones, 31.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado.

Votamos el resto del artículo 7.º

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado.

Iniciamos el debate del Título II. En primer lugar, hay un bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor Zavala tiene la palabra. ¿Va a defenderlas conjuntamente?

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Señor Presidente, voy a defender únicamente una de las enmiendas, que es la 145; las demás, las doy por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene S. S. la palabra.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: En el número 4 del artículo 165 se hace referencia al último censo de población de derecho disponible, y esto no es adecuado, ya que la renovación del censo de población se realiza cada diez años y, por tanto, sería inadecuado aplicar dicho censo a la designación de Senadores para cada Comunidad Autónoma.

Entendemos, por consiguiente, que la expresión correcta ha de ser «la población de derecho correspondiente a la última revisión del padrón municipal de habitantes», de acuerdo con el artículo 34.2 de la presente ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Mixto ya defendió sus enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Reigada.

El señor REIGADA MONTOTO: Señor Presidente, existe una enmienda transaccional que abarca las tres enmiendas nuestras, que son las números 15, 16 y 17, que implica la retirada de nuestras tres enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Perfecto. ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

El Senador Izquierdo tiene la palabra.

El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente,

más que turno de portavoces es para un turno en contra a la enmienda de los Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el Senador Izquierdo para turno en contra.

El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, nos oponemos a la enmienda, entre otras razones, porque el único censo que opera como documento oficial es el censo de población, que se obtiene, no del padrón municipal, sino, como consta en esta misma ley, del fichero electoral que se elabora. Este censo de población al que estamos haciendo referencia, si bien es verdad que se elabora cada diez años, cada cinco años es actualizado. Nos parece que es mucho más objetivo este censo cada diez años, con su actualización cada cinco, que los posibles deslizamientos de población que podrían conferirse de obtenerlo de los padrones municipales, que se efectúan con una periodicidad anual, pero que serían fruto de una polémica permanente, sobre todo, cuando el número de habitantes de cada Comunidad Autónoma estuviera rozando los límites que se necesitan para tener un Senador más o un Senador menos. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

Estimamos, por tanto, que la referencia al censo de población y a su actualización cada cinco años es mucho más objetiva y documentalmente más procedente.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

Pasamos a las votaciones.

Votamos agrupadamente las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 166; a favor, nueve; en contra, 156; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Vascos.

Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 162; a favor, uno; en contra, 160; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Hay una enmienda transaccional al artículo 172.3, que ruego al señor Secretario primero que la lea.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Rodríguez Pardo): Enmienda transaccional al artículo 172.3: «Las papeletas destinadas a la elección de Senadores irán impresas por columnas en una sola cara reseñando las indicaciones que

se expresan, y con la composición que se señala, en las siguientes normas:

a) Denominación o sigla y símbolo de la entidad que presenta al candidato o candidatos, ya sea un partido, federación, coalición o agrupación de electores. Bajo esta denominación o sigla, figurarán los nombres del candidato o candidatos respectivos, relacionados, en este último caso, por orden alfabético a partir de la inicial del primer apellido.

b) Intercalados entre los nombres de los candidatos deben figurar de forma diferenciada los de sus respectivos suplentes.

c) Por columnas, y siguiendo el orden de arriba a abajo y, en su caso, de izquierda a derecha, se relacionarán cada uno de los bloques formados por la denominación de la entidad presentadora y sus candidatos respectivos. El orden de esta relación se determinará por sorteo, en cada circunscripción sin atender a orden alfabético alguno.

d) El nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro. El votante marcará con una cruz el recuadro correspondiente al candidato o candidatos al que otorga su voto».

Firman todos los portavoces.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Arespacochaga tiene la palabra.

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Debe haber un error, porque no es esa la enmienda que ha sido adoptada por todos los Grupos. Hay un error tipográfico. Hay algo. No es esa la enmienda.

El señor LABORDA MARTIN: Es simplemente lo del orden de derecha a izquierda, que queda suprimido en el acuerdo final. Le puedo entregar al señor Secretario de la Mesa el texto definitivo.

El señor PRESIDENTE: Si sólo es eso, no hace falta. ¿Está de acuerdo el señor Arespacochaga?

El señor ARESPACOCCHAGA Y FELIPE: Hay algo más. ¿Dónde está la enmienda? Está también el tema de la diferenciación tipográfica.

El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores portavoces que cuando haya enmiendas transaccionales entreguen a la Mesa la correcta. (Pausa.)

La enmienda que se ha entregado a la Mesa está sin firmar.

Suspendemos cinco minutos. No abandonen los señores Senadores la Sala, porque continuaremos inmediatamente la sesión. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: ¿Tiene la bondad, el señor Secretario, de dar lectura a la enmienda transaccional en su correcta redacción?

El señor SECRETARIO PRIMERO (Rodríguez Pardo): «Artículo 72.3. Las papeletas destinadas a la elección de

Senadores irán impresas por columnas en una sola cara, reseñando las indicaciones que se expresan y con la composición que se señala en las siguientes normas:

a) Denominación o sigla y símbolo de la entidad que presenta al candidato o candidatos, ya sea un partido, federación, coalición o agrupación de electores. Bajo esta denominación o sigla figurarán los nombres del candidato o candidatos respectivos, relacionados, en este último caso por orden alfabético, a partir de la inicial del primer apellido.

b) Debajo del nombre de cada candidato y diferenciado tipográficamente de él aparecerá el de su suplente.

c) Por columnas, se relacionarán cada uno de los bloques formados por la denominación de la entidad presentadora y sus candidatos respectivos. El orden de esta relación se determinará por sorteo en cada circunscripción, sin atender a orden alfabético alguno.

d) El nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro. El votante marcará con una cruz el recuadro correspondiente al candidato o candidatos al que otorga su voto.»

Firman todos los portavoces.

El señor PRESIDENTE: Habida cuenta de que la enmienda está firmada por todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios, la Presidencia pregunta a la Cámara si se aprueba por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.

Ponemos a votación el Título II del texto del dictamen, artículos 154 a 175, salvo el 172 que acabamos de aprobar. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 163; a favor, 162; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Título II según el texto del dictamen.

Entramos en el Título III.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para defender sus enmiendas.

Título III
Artículos
176 al 200

El señor RENOBLES VIVANCO: Señor Presidente, señorías, las enmiendas correspondientes al Título III vamos a darlas todas por defendidas a excepción de la correspondiente al artículo 196 antiguo, cuya numeración ahora es el 197, la referente a la moción de censura del Alcalde.

Sin entrar en una serie de antecedentes históricos que existen respecto a la moción de censura del Alcalde y que pasa desde la cesación del Alcalde por resolución judicial hasta los distintos criterios que se han ido observando en las distintas leyes electorales, nosotros creemos que nos encontramos con un problema verdaderamente serio y grave, un problema serio y grave por la sencilla razón de que siendo el Ayuntamiento, como es, una entidad administrativa, si se está tratando de una moción de censura del Alcalde será por irregularidades, por abandono o por negligencia de sus funciones. Es indudable que esto puede mezclarse o puede llegarse a politizar, dado que mu-

chas veces la moción de censura del Alcalde puede plantearse única y exclusivamente, no tanto porque se den estas irregularidades, sino porque políticamente interesa a determinados grupos coaligarse para, en un cierto momento, hacer cesar a aquel Alcalde que ha sido elegido precisamente por la mayoría de los concejales y la mayoría absoluta.

Nosotros creemos que deben establecerse unas cauteles y unas garantías para evitar que se produzca dentro de los ayuntamientos una especie de guerra que lleve a los mismos a una inestabilidad, y lo que se quiere conseguir con este artículo es que los grupos que están en cada Ayuntamiento dialoguen, que los grupos que están en cada Ayuntamiento traten de llegar a resolver los problemas de mutuo acuerdo, y no se convierta en una especie de arma arrojadiza que dé justamente los resultados contrarios.

Esa es la razón por la cual hemos propuesto una redacción del artículo en el que hemos reforzado simplemente la mayoría que sea necesaria para proponer una moción de censura respecto al Alcalde. Esta mayoría nosotros la hemos colocado prácticamente en los dos tercios de los concejales. Esta es sustancialmente la esencia de nuestra enmienda, que creemos que debería prosperar. No olvidemos ese refrán castellano que suele decir que el pueblo pequeño se suele convertir en un infierno grande, y no contribuyamos nosotros a convertir la vida de nuestros ayuntamientos en una especie de batallas campales en las cuales, al final, prácticamente, se esté olvidando lo fundamental de la institución municipal.

Hay otra enmienda que yo quiero insistir en ella y brevemente, puesto que ya lo he dicho antes cuando he intervenido a favor de la ley, y es la enmienda número 153.

Nosotros hemos redactado una enmienda en relación con esta materia porque el régimen electoral municipal dentro del Estatuto de Autonomía del País Vasco es un régimen que está reservado especialmente por el Estatuto a los territorios históricos. Entonces, el territorio histórico es el que tiene que establecer la norma electoral, la cual tendrá fuerza de ley, pero nunca tendrá el aspecto o la característica de ley formal. Nosotros creemos que debería establecerse claramente esa excepción. Por eso habíamos redactado un artículo 159 bis con la única finalidad de que esa especificidad quedara claramente recogida. Pido a la Cámara que tenga en cuenta estas circunstancias y, en especial, lo que he dicho respecto al Alcalde.

Me atrevo a pedirles el voto favorable, porque creo que con ello vamos a contribuir mucho más a pacificar nuestros municipios que no a ponerlos en situación levantisca.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Renobales. Para consumir un turno en contra tiene la palabra el señor Izquierdo.

El señor IZQUIERDO COLLADO: Gracias, señor Presidente, empezando por la segunda enmienda remito al

señor Renobales a la adicional primera de esta ley, en la que se señala que todo aquello que sea competencia de las Comunidades Autónomas les queda perfectamente reconocido en la ley. Estimo que esta enmienda corresponde pasarla a la legislación propia de la Comunidad Autónoma.

Y centrándome en la enmienda 152, que me parece muy importante, con respecto al número de concejales necesarios para establecer la moción de censura, estimo que, efectivamente, es un paso de enorme trascendencia en esta ley. Esta mañana me extrañaba que en la cita, creo que objetiva, de sacrificios que de alguna manera ha hecho el Partido Socialista con el fin de consensuar y perfeccionar esta ley no se haya citado precisamente la introducción de la moción de censura por mayoría absoluta. Me pregunto si algunos Partidos tuvieran el enraizamiento que tiene el Partido Socialista Obrero Español hoy en tantos pueblos de España hubieran introducido un elemento y un arma tan importante como la moción de censura por mayoría absoluta. Creo que esto es un rasgo evidente de que consideramos a los ayuntamientos mayores de edad, de que consideramos que los ayuntamientos deben ser gobernables y que la gobernabilidad de un Ayuntamiento pasa por la mayoría absoluta sin más cuantificaciones añadidas.

Por tanto, estimamos que para evitar frivolidades la moción de censura debe ser constructiva tal y como se contempla en el proyecto, pero ir al sistema de dos tercios y asistir al espectáculo de alcaldes en permanente minoría a la hora de aprobar los presupuestos y en una serie de mociones y de direcciones de ese Ayuntamiento, nos parece un espectáculo bochornoso, aunque he de reconocerle que quizás hasta que esta ley entre profundamente en su práctica puede ser un incentivo a la discrepancia, que es a la que usted se refería.

Nosotros estimamos que esta moción de censura es un signo de valentía, y en esta ley electoral es un signo por el que se reconoce madurez y mayoría política a todos los ayuntamientos, desde los pequeños a los grandes. Nos oponemos a su enmienda porque, además, en ella hay otro apartado en el que se señala que en caso de moción de censura solamente pueden ser candidatos alternativos los tres primeros de la lista. Nosotros consideramos que cuando un Alcalde pierde la mayoría absoluta ese Ayuntamiento ha entrado en crisis política, y para salvar esa crisis política hay que estar lo más abiertos posible a todos los registros de esa Corporación, que, en algunos casos y precisamente por no haber sido puestos en cabeza en esas listas municipales, pueden aglutinar y efectuar un consenso de la Corporación sin estar incluidos en esos tres puestos.

Aunque aprecio los argumentos que ustedes dan y le digo que tiene una visión de carácter mayoritario en su Comunidad Autónoma, sin embargo, creemos que su propuesta es menos generosa que la nuestra y nos oponemos a sus dos enmiendas, señor Renobales.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de portavoces tiene la palabra el señor Renobales.

El señor **RENOBALES VIVANCO**: Quiero contestar al señor Izquierdo diciéndole que si hubiera tenido ocasión de repasarse, por ejemplo, las normas forales de la Diputación de Vizcaya, por citar una —le puedo citar lo mismo la de Guipúzcoa o la de Alava—, habría visto que la moción de censura antes de que se introdujera aquí lo estaba ya respecto de los Diputados generales forales y que también estaba introducida con los mismos calificativos que se establecen en esta ley electoral municipal, utilizando la mayoría absoluta. Pero, precisamente, porque ya está introducida, precisamente porque la conocemos y, precisamente, porque conocemos también la vida municipal, y en esa vida municipal, aunque dice usted que nosotros tenemos mayoría, también podemos no tenerla, lo que sí queremos es dar estabilidad a ese ente, que es muy importante para que la vida ciudadana llegue a situaciones reales y efectivas de convivencia pacífica.

Yo no dudo la valentía. Mucho más valiente hubiera sido que hubieran puesto por mayoría simple, pero, a continuación, me reconocerá que nos encontramos siempre con un criterio de desestabilización o, por lo menos, con un factor posible de desestabilización que puede hacer prácticamente imposible la vida en los municipios. Y es más, puede ser incluso que, a continuación, el ciudadano, lejos de querer participar en la vida municipal, se vaya apartando cada vez más, porque, efectivamente, en niveles y en círculos pequeños estas polémicas o estas luchas, o como se quiera llamar, resultan, indudablemente, mucho más odiosas que las que pueden resultar en niveles superiores. Esa es la razón por la que después de tener y de reconocer que nuestra experiencia también ha ido por esa vía cuando hemos establecido las normas forales respecto a nuestros territorios históricos, después de reconocer eso, quiero decirle que seguimos insistiendo y creemos que es quizá un paso prematuro, aun reconociendo que todos los españoles son ciudadanos mayores de edad, que todos tienen mucho sentido común y que nunca va a ocurrir nada, pero quiera Dios que esta profecía que en este momento me atrevo a hacer, aunque de profeta no tengo nada, no resulte nunca.

El señor **PRESIDENTE**: Gracias. Tiene la palabra el señor Izquierdo.

El señor **IZQUIERDO COLLADO**: Señor Renobales, entiendo sus razones, le quiero repetir que la clave de este artículo está en que ninguna Corporación local, excepto alguna muy específica de la que quizás hablemos, puede regirse en un sistema de minorías y, por tanto, en una pérdida de confianza de la Corporación. Esta es la clave por medio de la cual nosotros introducimos a la gran mayoría de las entidades locales de España en ese sistema de gobernabilidad lógico y evidente. Estimo y es evidente que los Partidos políticos van a tener que hacer un esfuerzo grande a la hora de componer sus listas electorales, con el fin de que aquellas personas que ellos presentan sean personas que tienen muy claro el programa de ese Partido, que tienen muy clara la relación y la

vinculación con el Partido, con el fin de que luego no se puedan efectuar fugas de escasa justificación, y en ese sentido va a ser un trabajo complementario que me parece positivo el que van a tener que desarrollar los Partidos políticos.

En último término, lo que he de decirle es que un Ayuntamiento, una Diputación, en los cuales el Presidente o el Alcalde no tengan mayoría absoluta es un Ayuntamiento o una Diputación que no sé si tienen garantía de estabilidad o una garantía de ingobernabilidad.

El señor **PRESIDENTE**: Gracias.

En primer lugar votamos las enmiendas al Título III del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, ocho; en contra, 163; abstenciones, una.

El señor **PRESIDENTE**: Quedan rechazadas.

A continuación, enmiendas 71 y 72, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 168; a favor, 30; en contra, 138.

El señor **PRESIDENTE**: Quedan rechazadas.

Por último votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 168; a favor, 164; abstenciones, cuatro.

El señor **PRESIDENTE**: Queda aprobado.

El Título IV tiene dos enmiendas del Grupo Mixto, una de las cuales, la 73, se ha dado por defendida y queda la número 1, que no está defendida.

Tiene la palabra el señor Castro Cordobez.

El señor **CASTRO CORDOBEZ**: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, precisamente acabamos de oír hablar, en las enmiendas anteriores, de lo que comporta para la buena marcha de las Corporaciones locales, en este caso insulares, la estabilidad y la gobernabilidad, en unas instituciones que deben ser fundamentalmente administrativas, porque así lo han sido hasta ahora. Nosotros presentamos esta enmienda al artículo 200, que actualmente es el 201, porque resulta que los Cabildos insulares, siendo instituciones semejantes a las Diputaciones provinciales, por ejemplo, según queda en la ley —una ley bastante consensuada y, por qué no decirlo, bastante buena, yo diría que muy buena, pero en la que nos queda esta laguna para los Cabildos insulares— van a ser las únicas instituciones en toda España en donde el Presidente se elige por la lista más votada, y eso, señorías, repercute posteriormente en la gobernabilidad de la institución. Y lo estamos

viendo actualmente, porque según el Decreto-ley por el que se estaban rigiendo estas elecciones, el Presidente estaba elegido por la lista más votada, y hemos visto cómo los resultados han sido negativos. En la práctica, eso lleva a que no se entiendan los distintos grupos políticos y se nieguen a apoyar a un Presidente no deseado porque es el de la lista más votada. Eso se ha dado en la práctica. Creo que estamos a tiempo de reflexionar y de corregir esto, porque esta situación hace que sean poco gobernables, y se creen dificultades, unas instituciones que son fundamentalmente administrativas y que tienen una gran importancia en el funcionamiento y en la vida política y administrativa de las Islas.

Señorías, yo les pido, finalmente, que reflexionemos en esta Cámara sobre lo que vamos a aprobar, porque recalco que los Cabildos insulares van a ser las únicas instituciones en toda España en que el Presidente sea elegido por la lista más votada y nosotros entendemos que eso no es bueno y que puede causar perjuicios a la gobernabilidad y a la administración de las Islas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro Cordobez.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Izquierdo.

El señor IZQUIERDO COLLADO: Efectivamente, señor Presidente, en mi anterior intervención yo me refería a que había alguna excepción a la norma que estaba comentando, con motivo de la enmienda del Senador Renobales, y esa excepción es la elección del Presidente del Cabildo Insular. Elección que constituye una especificidad en esta ley electoral y que también, de alguna manera, se solapa a lo que tienen de específico los Cabildos insulares como instituciones propias, únicas y exclusivas de las islas Canarias.

Efectivamente, el Presidente es automáticamente aquel que encabeza la lista más votada y, además, es un Presidente que en algunos momentos puede estar en minoría dentro de la corporación del Cabildo insular.

Sencillamente, esta tradición, que ya era contemplada en las elecciones del año 1979, que también fue contemplada en la reforma que se introdujo en 1983, nosotros la seguimos manteniendo, ateniéndonos precisamente a la misma y ateniéndonos a que informaciones que no coinciden con la suya indican, sin embargo, que puede ser un eje de estabilidad el hecho de que el representante de la lista más votada en el Cabildo, no en el Ayuntamiento, sea automáticamente el Presidente.

¿Esto qué significa? Significa que las elecciones de los Cabildos insulares tienen un cierto carácter presidencialista. Es decir, se vota directamente al Presidente; por tanto, la elección del Presidente del Cabildo insular es una elección de primer grado, y eso hay que valorarlo en lo que, de alguna manera, tiene de específico.

Evidentemente un Presidente de un Cabildo insular de la lista más votada, pero que no tenga mayoría absoluta, debe tener muy claro que la gobernabilidad de su Cabil-

do insular depende de que interprete correctamente su función de Presidente y de que no pretenda arrogarse una gestión y llevar a cabo una actuación política como si su propio Partido fuera el que está única y exclusivamente gobernando. Eso le obliga a buscar un consenso y una participación entre el resto de las fuerzas políticas y, por tanto, sería malo que un Presidente de un Cabildo insular, en función de que la ley le concede automáticamente la Presidencia, se arrogase una mayoría que no tiene, lo mismo que sería malo que el resto de las fuerzas políticas, que a lo mejor pueden sumar mayoría absoluta, interpreten que por el simple hecho de no tener mayoría absoluta no le deben reconocer como Presidente.

Yo asumo esta especificidad, tenemos razones para mantener esta regla y una de ellas es la estabilidad, así como uno de los retos y una de las dificultades es la gobernabilidad, pero creemos que mantenerla es positivo y que alcanzar ese objetivo en los Cabildos insulares es factible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Castro.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señor Izquierdo, yo creo que los argumentos que usted ha esgrimido aquí no se sostienen, y no se sostienen simplemente trasladándolos a cualquier otra institución. Concretamente, cuando los españoles votan al Presidente del Gobierno votan a un candidato, pero luego es la Cámara la que lo ha de elegir. Presuponer que un señor se va a entender políticamente con otras fuerzas políticas estando en minoría en una Corporación es mucho suponer, y la realidad es que en la práctica se está dando todo lo contrario. Es decir, tenemos Cabildos en los que se funciona muy mal porque el grupo gobernante está en minoría, no hay acuerdo, y no se ha podido llegar a acuerdos de Gobierno. Incluso le digo otra cosa: hay Cabildos que yo conozco en donde la oposición está gobernando en contra del grupo que sostiene la Presidencia del Cabildo. Por lo tanto, esos argumentos no son válidos.

En cuanto a que usted piense que tal como está es un factor de estabilidad, en base a otros argumentos quiero que me lo indique, porque supongo que razones tendrá, pero razones claras no las he oído; simplemente he oído que usted dice que tal como está es un factor de estabilidad. Por lo demás, no creo que haya argumentos sostenibles.

Repito, ¿por qué en unos ayuntamientos sí y en los Cabildos no? ¿Por qué en todas las Comunidades Autónomas sí —todas las Comunidades Autónomas tienen el mismo sistema electoral— el Presidente lo elige el Parlamento y en los Cabildos no? ¿Por qué en unas Diputaciones sí y en los Cabildos no? Y así podría seguir haciéndole comparaciones.

Por tanto, no hay razón que justifique el sostenimiento del actual sistema electoral para la Presidencia de los Cabildos.

Gracias, señor Presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Guimerá.

El señor GUIMERA GIL: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, yo haría un llamamiento al entendimiento del Grupo Socialista, dado que esta Ley — que es una Ley buena — ha sido consensuada, y ese es el espíritu en el que se ha llevado a efecto tanto en el Congreso como aquí, señor Vicepresidente, porque entiendo que no hay ninguna razón, que no existe ninguna razón de peso para mantener una excepción en los Cabildos Insulares, cuando la regla normal en todos los Ayuntamientos y Diputaciones está siendo que el que salga elegido es aquel que provenga de la mayoría.

Realmente, decir hoy, tal como está la composición de los grupos políticos, que un presidente puede llevar a cabo la gobernabilidad y la estabilidad del órgano que rige sin el apoyo de una mayoría cualificada es, como muy bien ha dicho el señor Castro Cordobez, cuanto menos una utopía, y esto se está demostrando en la práctica en los Cabildos Insulares.

Las razones que ha esgrimido el señor Izquierdo para mantener esa especificidad en los Cabildos Insulares tampoco existen. Los Cabildos son los que tienen que llevar a efecto una auténtica labor de gobierno insular y tienen que estar espaldados por una mayoría. Introducir una excepción en el contexto general de esta Ley de lo que va a ser para los Ayuntamientos y Diputaciones, me parece mal, porque la excepción, en sí misma, no está justificada, al menos con razones claras, con razones obvias que demuestren su eficacia, y, en definitiva, va a ser malo, porque, vuelvo a repetir, puede darse el caso de que la lista más votada no obtenga la mayoría y haga prácticamente inestable e ingobernable la propia Corporación, que en este caso son los Cabildos Insulares, muy similares, de otra parte, a las Diputaciones.

El argumento de que algunas minorías no cualificadas o no constitucionales, pero que, en definitiva, tengan unas ideas que van más allá, tampoco es ninguna razón, puesto que nunca tendrán la posibilidad de acceder a la Presidencia de los Cabildos.

En esa línea yo insto al Grupo Socialista a que se pueda llegar a un acuerdo en función de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, que sería reconducir la elección del Presidente del Cabildo al igual que en las Diputaciones, para que la misma sea llevada a efecto por la mayoría.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.

El señor IZQUIERDO COLLADO: Muchas gracias. Es-timo que son enormemente razonables los argumentos que estoy escuchando. Por supuesto, me remito precisamente al carácter específico y excepcional que nosotros damos en este caso a los Cabildos, porque esos mismos

argumentos son los que nosotros hemos utilizado en el caso de los Ayuntamientos y de las Diputaciones.

Nosotros, porque estimamos que precisamente el dotar de un carácter fundamentalmente administrativo a los cabildos, como decía el propio representante del Grupo Mixto, y el mantener esa tradición que, en opinión de otros —desde luego, no de los Senadores intervinientes en contra— consigue una estabilidad, al menos hoy por hoy, en las Islas Canarias quizá superior a la que podría conseguirse por el sistema de mayoría absoluta, vamos a mantener el texto de la Ley, aunque somos sensibles a los argumentos y a los razonamientos que han dado los intervinientes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Procedemos a las votaciones. Vamos a votar separadamente la enmienda número 1 de la 73, habida cuenta del diferente origen de cada una.

El señor GARCÍA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 179; a favor, 46; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 73.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, cinco; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 132; en contra, tres; abstenciones, 40.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Titulo V. Las enmiendas del Grupo Mixto han sido defendidas. Resta, pues, por defender la enmienda 154, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el señor portavoz.

El señor RENOBLES VIVANCO: Como ya hemos explicado reiteradamente el tema, la damos por defendida y la sometemos a votación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Votamos la enmienda número 154.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, 10; en contra, 165; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos las enmiendas 74, 75, 76 y 77, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, tres; en contra, 173.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el Título V conforme al texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 175; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Vamos a discutir las disposiciones adicionales.

En primer lugar, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender las enmiendas números 155 a 160.

El señor RENOBLES VIVANCO: Señor Presidente, señor Vicepresidente, señorías, de todas las enmiendas correspondientes a las disposiciones adicionales en realidad la única que vamos a sostener es la relativa a la disposición adicional cuarta.

El señor PRESIDENTE: ¿Número de enmienda, señor Senador?

El señor RENOBLES VIVANCO: Perdón, señor Presidente, me parece que es la 156.

El señor PRESIDENTE: Las demás enmiendas ¿se retiran?

El señor RENOBLES VIVANCO: Se pueden retirar, puesto que nuestra primera enmienda no hace más que suprimir la mención de «Constitución y ley orgánica», que, en definitiva, creemos que no conduce a nada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor RENOBLES VIVANCO: En cuanto a la enmienda referente al número 4, hemos mantenido prácticamente la redacción de la enmienda con la supresión del contenido de los Títulos III y V, que son los que hacen referencia expresa a Diputaciones forales o, si se quiere llamarlas así, a Diputaciones provinciales y al régimen electoral municipal.

Entramos siempre en la cuestión de si son o no normas básicas. No se dice expresamente en el texto de la ley, aun cuando se dice que no podrá afectarlo la legislación

propia de la Comunidad Autónoma, de lo cual yo deduzco —y creo que el Tribunal Constitucional lo deducirá también— que tienen carácter de normas básicas. Creemos que es una limitación excesiva que sobrepasa prácticamente aquello que debe tener el carácter verdaderamente de básico o de fundamental, y esa es la razón por la cual nosotros hemos propuesto una redacción en la que hemos suprimido los Títulos III y V.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cabrera.

El señor CABRERA BAZAN: Señor Presidente, señorías, simplemente para oponernos a la enmienda 156, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, porque entendemos que los Títulos III y V son temas tan importantes que no podemos remitirlos a la legislación de las Comunidades Autónomas.

Nada más, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Votamos la enmienda 156, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, nueve; en contra, 166; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, tres; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las disposiciones adicionales primera a cuarta, conforme al texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 168; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones adicionales.

Las disposiciones transitorias, derogatoria y final no tienen votos particulares, por lo que si los señores Senadores no tienen objeción en contra se votan conjuntamente. (Pausa.) No existe objeción.

Votamos las disposiciones transitorias una a quinta, la disposición derogatoria y la disposición final.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 176, abstenciones, una.

Disposiciones adicionales primera a cuarta

Disposiciones transitorias, derogatoria y final

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones de que se ha hecho mención.

Se dará traslado de las enmiendas efectuadas al Congreso de los Diputados, para que se pronuncie sobre las mismas previamente a la sanción del texto de la ley por Su Majestad el Rey.

Quiero recordar a los señores Senadores que la Comisión de Justicia se reúne mañana a las diez horas y se mantiene, asimismo, la reunión a la una. La reunión de las diez es para designar la Ponencia, que ha de informar

el proyecto de Ley Cambiaria y del Cheque y la de la una para dictaminar el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

También quiero recordar a los señores Senadores que, a partir de las seis y media, están a su disposición los autobuses para el traslado a Aranjuez, a fin de asistir al acto de la bandera.

Se levanta la sesión.

Era la una y cuarenta de la tarde.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00.-28008-Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961